

87ª REUNION — Continuación de la 14ª SESION EXTRAORDINARIA
29 DE ENERO DE 1962

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Jorge Raúl Decavi,
Oscar López Serrot e Isaac Breyter

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

SECRETARIO DE ESTADO PRESENTE:

de Hacienda,
doctor JORGE WEHBE

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Julio E.
ACUNA, Ramón Edgardo
ADROGUE, Carlos A.
AIDAR, Miguel
ALEMAN URQUIZA, Luis César
ARIETA, Ignacio
ARITO, Juan
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BARRETO, Miguel
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRO, Angel Francisco
BENEVENTANO, Domingo
BERTONE, Marcos E.
BLANCO, Rubén Victor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BREYTER, Isaac
BUSQUET SERRA, Manuel
BUSTOS, Jerónimo L.
CAMARLINGHI, Alfredo E.
CANEDO Raúl
CAPRIOTTI, Roberto A.
CARDENAS, Juan Carlos
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CASAS, José B.
CASATI, Hércules H.
CONDOLUCCI, Domingo A.
CONTE, Luis
CONTE (h.), Adolfo
CORTAZAR, Eleodoro M.
CHAMORRO, Cristino
DECAVI, Jorge Raúl
DESPOUY, Pablo Pedro
DOURS, Roberto José
ELENA, Reinaldo
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FERNANDEZ, José Manuel
FERREIRA, Jorge W.
FOSERO, Raúl F.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FREYTES, Angel R.
FUERTES, A. Ricardo
GALLO, Luis M.
GARCIA, Ernesto

GARCIA VEIGA, Ignacio
GALONA, Alberto Agustín
GILI, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GÓMEZ BELLO, Miguel Ángel
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GOROSPE, Valentín
GOYA, Israel
GRANDI DE MARTIN, Palmira A.
GUTIERREZ, José María
HEREDIA, Gilberto L.
HERNANDEZ RAMÍREZ, Rafael
INSAUERALDE, Leopoldo S.
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUÁREZ PENALVA, Miguel Ángel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
LAVALLE, Ricardo
LICEAGA, José V.
LONGHI, Julio P.
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ FERROT, Oscar
LLUGDAR, Elias N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTEAGUDO, Francisco
NAIM, Juan
NOUGUES, Isaías Juan
OREJA, Pablo Fermín
PARENTE, Miguel A.
PARRY, Enrique
PEREZ, Inocencio A.
PETRAGLIA, Angel N.
POLOGNA, Aurelio José
POSSE, Melchor S.
PRECE, Ange Oscar
RABANAL, Francisco
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
SAMMARTINO, Ernesto E.
SAURET, Héctor B.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SCHWEIZER, Bernardo
SOLARI, Juan Alberto
SUAREZ, Facundo Roberto
TARULLI, Pascual
TONELLI, Haroldo Juan
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VINCIGUERRA, Rómulo

ZADOFF, Arón
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, EN COMISION:

BURDEOS, José Antonio
SUJEROS, Pedro Ignacio P.

AUSENTES, CON LICENCIA:

BECERRA, Carlos Alberto
GÓMEZ, Augusto
RUIZ, Lucio Carlos
STORANI, Conrado Hugo

AUSENTES, CON AVISO:

FASCE, Antonio
GONZÁLEZ, Ricardo A.
LOYOLA, Virgilio
MERCADER, Emir E.
PENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
SOLANAS, Juan Carlos

AUSENTES, SIN AVISO:

ABAROA, Rufino Vicente
ABDALA, Felipe
ABRAHAM, Réstom
AGUINAGA, Carlos Ernesto
ALARCIA, Fermin
ALZABE, Pedro Bernabé
ANGARONI, Héctor Marcelo
AQUINO, Porfirio Antonio
ARMENDARIZ, Alejandro
BAUDUCCO, Enrique
BELNICOFF, Manuel
BILBAO, Alfredo O.
BONIFACIO, Juan José
BROUWER DE KONING, Julio R.
BULIT GON, Enrique A.
BUSANICHE, Julio J.
CALABRESE, Pablo
CAMEL, Carlos Ernesto
CONTIN, Carlos R.
COSTA, Abelardo M.
CUEVAZ, Agustín
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
ESPINA, Juan Carlos
FERNANDEZ TRUJO, Ricardo
FERARI, Luis
FERRARIS, Jorge Domingo
GAILLARD, Augusto

GALEANO, Roberto A.
GARAY, F. Alfredo
GARCÍA FLORES, José L.
GARCÍA SOLA, Héctor
GUTIERREZ, Victorino H. B.
JOFRE, Emilio
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LAROCCA, José R.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LUELMO, Horacio Flavio
MARTÍNEZ ROLÓN, José
MÁS, Juan Antonio
MATHOV, Arturo

MIHURA, Emilio
MONTE, Ricardo Álvaro
MORENO, Eufemio Tecla
MOSCA, Gabriel Carlos J.
MURIAS, José
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
PANELO, Ricardo E.
PAVIOLO, Ricardo J.
PELLÓN, Raúl
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PINTOS ROSAS, Francisco M.
POZZIO, Antulio F.
RECIO, José A.

ROBERTO, Mario
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín
ROJAS, Nerio
ROMERO, Manuel Ángel
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SANTAGADA, Nirido E.
SANTONI, Nabucodonosor
SEGOVIA, Carlos A.
SPANGENBERG, Enrique
TELLA BERRERA, José Aurelio
TROLLO, Eleogardo B.
UZAL, Francisco Hipólito
VESCO, José Luis

SUMARIO

1.—Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre reformas al régimen impositivo (orden del día 1108 ½). (Pág. 6410.)

2.—Apéndice:

I.—Inserción de documentos. (Pág. 6448.)

II.—Asuntos entrados:

I.—Proyecto de ley del señor diputado Contte y otros: designación de presidente y vicepresidente de la Nación en caso de vacancia y acefalía del Poder Ejecutivo. (Pág. 6450.)

II.—Proyecto de declaración de la señorita diputada Baigorria referente a decretos de reestructuración de la enseñanza secundaria, reglamentación del artículo 28 de la ley de universidades y política educativa. (Pág. 6452.)

III.—Proyecto de declaración del señor diputado Rodríguez Araya con motivo del rechazo del pedido de reajuste de haberes de jubilación formulado ante la Caja Nacional de Previsión para Periodistas y Gráficos por ex legisladores. (Pág. 6453.)

IV.—Proyecto de resolución del señor diputado Perette sobre tratamiento de proyectos sobre la apertura de radio Rivadavia, amnistía, costo de la vida, proscripciones, cumplimiento de leyes sociales, reintegro de cesantes y obligaciones contraídas con los ferroviarios. (Pág. 6454.)

V.—Proyecto de resolución del señor diputado Elena: pedido de informes sobre razones de la transferencia a la actividad privada de trabajos de dragado de rutas navegables y puertos de la Nación. (Pág. 6454.)

VI.—Proyecto de resolución del señor diputado Camarlinghi: pedido de informes referentes a procedimiento policial en

el domicilio de la pintora señorita Marina Bengoechea. (Pág. 6455.)

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de enero de 1962, a las 15 y 35:

1

REFORMAS AL REGIMEN IMPOSITIVO

Sr. Presidente (Decavi). — Continúa la sesión con la consideración del dictamen referente al proyecto de ley de reformas a las leyes impositivas (1).

Está en el uso de la palabra el señor diputado Nogués.

Sr. Nogués. — El viernes pasado, en momentos en que yo usaba de la palabra, el señor presidente de la Honorable Cámara, en forma que puede considerarse arbitraria levantó la sesión, invitando a pasar a cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Decavi). — Hago notar al señor diputado que la Presidencia ha usado en esa oportunidad de facultades que el reglamento le otorga.

Sr. Nogués. — Sí, señor presidente; pero permítame que haga la aclaración que estimo pertinente.

Al proceder así, la Presidencia lo hizo con el argumento de que el orador no entraba al fondo del tema en debate. Entiendo que un diputado tiene el derecho, antes de ocuparse del fondo de un asunto, de preparar el terreno para hacer su exposición.

Desde que llegué a esta Cámara he advertido que se me quería poner en la situación de declarármese fuera de la cuestión. En esta oportunidad hago estas manifestaciones porque no deseo que se me coloque en la situación de diputado que recurre a lo arbitrario y lo escandaloso.

Con mi actitud en la última reunión he tratado de defender el derecho que como legislador me asiste de expresar mis ideas. Y hay más, señor presidente; deseo expresar que a mí no se me hará decir lo que no debo decir, pero tampoco se me hará callar lo que no debo callar.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿Me permite, señor diputado Nogués?

(1) Véase Diario de Sesiones correspondiente a la sesión del 26 de enero.

Sr. Nougés. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Decavi). — El señor diputado ha hecho una incursión generalizadora con respecto a la actitud de la Presidencia, en cuanto respondería —según ha manifestado— a un plan para colocar al señor diputado en una sistemática violación del reglamento.

La Presidencia ha sido ejercida muchas veces por el ciudadano que habla, por su titular y por el señor vicepresidente 2º, y la garantía de su imparcialidad y corrección está avalada por la Honorable Cámara y documentada por las versiones taquigráficas.

El señor diputado tiene derecho a expresar su pensamiento dentro de las prescripciones reglamentarias. Esta es la norma igualitaria para todos los señores diputados, y ninguno de ellos puede, por vía de «preparación del terreno» para formular sus exposiciones, evadirse del reglamento, ni distraer el tiempo de la Honorable Cámara en disquisiciones de tipo político que no tienen atinencia con el fondo de la cuestión en debate. Tanto compromete al Parlamento que un señor diputado se vea privado de expresar libremente su pensamiento, como que el señor diputado pretenda hacerlo al margen del reglamento con lesión de los fueros de la Honorable Cámara.

Por esta razón, el señor presidente Monjardín ha llamado reiteradamente al orden al señor diputado y ha suspendido la sesión en uso de una facultad estatutaria y en preservación del orden y del propio decoro del cuerpo.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Nougés. — Cualquier ciudadano que lea con serenidad mi exposición verá que en ella no había ningún fondo político, sino el extraordinario motivo de servir con cariño y decisión los intereses que nos han sido confiados como legisladores por el pueblo argentino.

Continuando con mi exposición, pasaré a referirme a dos aspectos del despacho a consideración de la Honorable Cámara, a los que atribuyo suma importancia y trascendencia popular: se trata de los réditos de cuarta categoría y la creación de un gravamen a los jugos, zumos de frutas, sus extractos naturales o jarabes.

En lo que respecta a los réditos de cuarta categoría, considero que se impone una adecuada adaptación de los mismos con respecto a la inflación, al costo de la vida y a los mayores salarios que actualmente existen en el país. No es posible que continúen vigentes normas impositivas que se encuentran en completa disparidad con la realidad económica argentina. El contribuyente de cuarta categoría es, dentro de nuestro ordenamiento impositivo, el más castigado por la voracidad fiscal y es también —preciso es reconocerlo— el único que paga regularmente su tributo.

Es cierto que en los últimos veinte años los ingresos por el trabajo personal se han incre-

mentado extraordinariamente, pero es un aumento numeral, ya que el envilecimiento constante de la moneda hace que su poder adquisitivo sea cada vez menor. De ahí que para que haya una mayor justicia tributaria los réditos de la cuarta categoría deben mejorarse considerablemente modificando los mínimos no imponibles fijados por los artículos 20 y 21, y, al mismo tiempo, adaptando la escala adicional progresiva del artículo 86 de la ley vigente. Por ello es que al considerarse el proyecto en particular he de someter a la consideración de la Honorable Cámara la siguiente modificación al segundo párrafo de este artículo, que quedaría redactado en la siguiente forma: «Cuando esos réditos excedan de quinientos mil pesos moneda nacional, los contribuyentes citados en el apartado anterior pagarán, además, una tasa adicional progresiva de acuerdo con la siguiente escala.» Es decir que el rédito adicional se abonaría únicamente cuando el rédito neto sujeto a impuesto sea mayor de quinientos mil pesos. La escala tributaria a partir de esta cifra sería la misma que se encuentra vigente.

Ya que la situación afligente del erario nacional no permite la desgravación total de los contribuyentes de cuarta categoría, entiendo que al modificar los tributos y adaptarlos a las condiciones actuales de sueldos y costos, habremos aliviado en algo su situación.

Como representante de la provincia de Tucumán, que ocupa un lugar preponderante en la producción frutícola de la República, y que tiene el más alto índice de producción de uno de los cítricos de mayor consumo popular, el limón, con un 43 por ciento del total, no soy partidario de la creación de un gravamen a los jugos, zumos de frutas, jarabes o sus extractos naturales. Este impuesto vendría a incidir perniciosamente sobre industrias provinciales, locales, que se encuentran en plena etapa de perfeccionamiento y consolidación industrial y económica.

Por ello es que, en un todo de acuerdo con los fundamentos expuestos por el señor diputado por Entre Ríos, doctor Ferreira, ne de votar negativamente la creación de este impuesto por considerar que con el mismo se coarta una de las tantas iniciativas tan necesarias para la vida y el progreso de las provincias productoras.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado Suárez.

Sr. Suárez. — Señor presidente: el problema de la reforma impositiva ha llegado al Congreso, como se ha dicho en otras oportunidades, después de una larga discusión, pero en definitiva el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo no aporta nada sustancial porque se trata de una organización de tipo administrativo para adecuar y sintetizar algunos impuestos, y, en otro aspecto, para lograr una mayor

percepción mediante la reforma impositiva en el aspecto procesal.

El radicalismo del pueblo, por intermedio del señor diputado Marini, ha sostenido la necesidad de realizar un estudio profundo para encarar una reforma integral del régimen impositivo y evitar estos paliativos que se vienen sucediendo año tras años y que van trastrocando la economía del país. Esto es así porque no posibilitan la realización de planes concretos en el sector privado y mucho menos en el sector estatal.

Es evidente que el proceso económico del país requiere una reforma sustantiva del régimen impositivo. En tal sentido se viene luchando desde hace muchos años. En realidad, el señor diputado Marini ha pronunciado palabras concretas sobre el tema y ha roto un poco con el esquema tradicional sustentado en esta materia, donde todos los partidos opositores han tratado siempre de crear, digamos así, una situación eufórica estableciendo que no es necesaria la existencia de mayores tributos o la reglamentación y reordenamiento del régimen impositivo.

Es así que podemos recordar que durante la primera presidencia del doctor Yrigoyen, en distintas circunstancias, se quiso modificar el sistema impositivo argentino mediante reformas sustanciales destinadas a gravar las rentas de capital. Pero el Senado, donde había mayoría opositora al presidente Yrigoyen, paralizó siempre esas iniciativas, muchas de las cuales habían sido proyectadas por el diputado Carlos J. Rodríguez. También durante la presidencia del doctor Alvear se intentó introducir algunas reformas sustanciales al sistema tributario. Pero esa corriente fue sistemáticamente obstaculizada por las fuerzas conservadoras, que se oponían a una transformación integral en materia impositiva.

Acaecida la revolución de 1930, el 19 de enero de 1932 los conservadores, con criterio fiscalista, realizan desde el gobierno una reforma impositiva, introduciendo por primera vez los impuestos a los réditos, los cuales, establecidos con carácter temporario, han continuado aplicándose en virtud de sucesivas renovaciones, hasta llegar a las leyes que hoy nos rigen.

Todo esto hace pensar que frente a los problemas económicos que vive el país, a nuestro juicio angustiosos, debe recapitularse para tratar de llegar a una solución integral del sistema financiero de la República. Es indudable que las diversas concepciones políticoeconómicas imperantes han ido influyendo en esta materia. En la década anterior a 1930 hubo una neta influencia de la revolución de tipo político que vivió la República mediante el sufragio electoral libre y el acceso al poder de grupos de la clase media. A su vez, la reforma universitaria tuvo influencias de orden político y, a nuestro juicio, rindió magníficos frutos. En síntesis,

puede decirse que en este período el país entra decididamente por el camino de la democracia.

En 1930 se interrumpe esa evolución, y el país inicia una larga década de grandes trastornos, durante la cual nacen las primeras intervenciones de carácter económico, no con un sentido amplio y popular, sino en favor de un sector particular de la vida argentina. Surgen así organismos como la Junta Reguladora de la Yerba Mate, la Junta Reguladora del Vino, la Junta Reguladora de Granos, etcétera. Vale decir que la política conservadora inicia un sistema de gobierno caracterizado por la intervención estatal, e incluso adopta medidas que podríamos considerar como las desencadenantes del posterior proceso inflacionario, tales como las referentes al Banco Central y «diferencias de cambio». Todo esto fue conformando un sistema económico que, a nuestro juicio, terminó por parcelar la economía argentina, dividiéndola en sectores, y por favorecer solamente una etapa de la producción, olvidando los problemas del consumo y de la distribución de la riqueza nacional.

La revolución de 1943 inicia otro período, caracterizado por una acentuación de las reformas de carácter social, pero no de las de carácter económico. Por eso el radicalismo, aunque no combatió aquellas reformas sociales, manifestó claramente que ellas debían ser acompañadas por otras de tipo económico que las afianzasen mediante una mayor productividad, una adecuada tecnificación agraria y una industrialización bien orientada hacia los bienes de capital. Desgraciadamente, la República no pudo tener una orientación económica. Entonces, la falta de producción y una serie de disposiciones adoptadas en el campo económico hicieron que se rompiera el equilibrio económico del país.

En esa circunstancia los fondos de previsión social, cuya creación fue aplaudida por todos los sectores de la República, se transformaron de modo indirecto en verdaderos impuestos al trabajo, porque el esfuerzo de los trabajadores e incluso del sector patronal se dilapidó al obligarse a las cajas, a veces bajo la forma de meras presiones administrativas y otras por la misma ley, a comprar títulos del Estado que fueron descapitalizando los fondos acumulados en las cajas. De esta manera, los sectores pasivos sufrieron directamente las consecuencias de una política inflacionista que iba perturbando a los organismos de previsión en sus posibilidades de cumplir los fines de su creación.

Mediante estas exacciones —que, repito, fueron para mí impuestos al trabajo—, al exigirse que las cajas tomaran los bonos estatales, y también mediante la política de exigir a los bancos, manejados por un ordenamiento de tipo nacional, que fueran compradores de los bonos del Estado, prácticamente se fue generando una segunda emisión monetaria, lo que determinó un mayor desequilibrio en el campo económico. La tercera etapa, la que nos toca vivir, marca

un definido tinte económico. Luego de una seria perturbación en todos los órdenes económicos, frente a una falta absoluta de producción y a una declinación de los valores que alarma a la República, nos encontramos con sucesivas reformas a las leyes impositivas que, a nuestro juicio, no vienen a resolver los problemas en que el país se debate.

Creemos sinceramente, y así lo hemos manifestado de manera permanente, que la República necesita estabilidad monetaria, ya que con ella se consigue indirectamente el aumento masivo de los salarios reales y la ubicación adecuada de los capitales mediante una efectiva política de inversiones. Para obtener el resultado de la estabilización monetaria había que adoptar algunos de los siguientes caminos: organizar la economía mediante un sistema liberal, en el que se entendiese que la inflación y los desequilibrios de la economía obedecían únicamente a una política fiscal mal orientada y desordenada que provocaba déficit presupuestarios, o bien, determinar una correcta inversión de los recursos nacionales para lograr, juntamente con un presupuesto de tipo normal u ortodoxo, que el país se organizase de modo de ir resolviendo los distintos problemas planteados por el disloque económico producido en estos últimos años. Nosotros nos hemos inclinado por el segundo procedimiento. Creemos que es fundamental reducir el déficit fiscal, pero también tenemos que reconocer que la experiencia de los dos últimos años ha demostrado que no se puede capitalizar al país, como se esperaba, mediante la financiación exterior.

Es evidente que las renunciaciones sucesivas de los ministros de Economía, así como el fracaso de las financiaciones que se ha pretendido conseguir en el extranjero mediante una ley que en su hora combatimos en forma parcial, porque entendemos que el capital extranjero debe venir a la República pero en paridad de condiciones con el capital nacional, son indicios claros que demuestran que el camino es equivocado y que hay que intentar otras medidas para llegar a rápidas soluciones.

Entendemos que mediante una reforma impositiva que ordene la economía nacional, sin perturbar la libre iniciativa de los sectores privados, haciendo transferencias de fondos de modo de llevar recursos no inflacionarios a actividades productivas, se puede lograr una gran activación del capital nacional.

Entendemos que mediante una legislación que determine un incentivo para los capitales argentinos o extranjeros, dando seguridad a sus inversiones y a la vez asegurándoles una ganancia, podremos crear un gran movimiento del capital.

El índice de nuestra capitalización ha tenido su expresión más baja en el 19 por ciento, habiéndose recobrado hasta llegar ahora a algo más del 21 por ciento.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Suárez. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — El señor diputado expresa que la política económica financiera que desarrolla el Poder Ejecutivo no ha rendido los frutos en punto a la necesaria elevación de la producción y a la capitalización del país. Sin embargo, el país ha conocido las últimas referencias vinculadas con las estimaciones producidas por el Banco Central, estimaciones a las que el diputado que habla aludió cuando se consideró el presupuesto de la Nación, y que llevan a la conclusión de que en el año 1961 el crecimiento del producto bruto interno ha anotado la más alta cifra con respecto a las de la última década, concretada en un 5,7 por ciento, equivalente a un crecimiento del 3,6 por ciento por habitante al año, mayor inclusive que la tasa óptima prevista por el plan Alianza para el Progreso, que es del 2,5 por ciento.

Quiere decir que los planes económicos de desarrollo y de estabilización han dado ya en el año 1961 los resultados que todos aspirábamos: lograr un aumento sustancial en la producción.

Sr. Suárez. — Evidentemente, el problema estadístico nunca lo vamos a poder entender en forma concreta, porque él determina la interpretación y las técnicas de cómo se entienden los valores para establecer las escalas.

Nos agradaría que esas cifras que dio el señor ministro y que ratifica ahora el señor diputado, estuvieran coordinadas con todo el proceso económico. A nuestro juicio, desgraciadamente, no es así. Es una información de tipo parcial, porque si bien es cierto que hay un aumento, sobre todo del producto bruto industrial, él no es total en relación con las necesidades de reposición que tiene el país y que el mismo Banco Central ha determinado para el año 1960 en 663 mil millones de pesos.

Vale decir que vivimos un proceso de paralización por falta de reposición, como lo acaban de declarar las propias autoridades que gobiernan la República, por intermedio de la Secretaría de Transporte, que establecieron que el país necesita una reposición tan amplia que prácticamente estamos casi en una actitud de paralización.

No son nuestros términos los que vienen a crear una atmósfera de poco optimismo en el país. Todos querríamos ver un progreso manifestado en la República.

En su oportunidad probaré también con palabras oficiales que el señor ministro de Agricultura y Ganadería ha manifestado que en el campo agrario estamos lejos de poder repetir las cifras de los años 1936, 1937 ó 1938. Vale decir que si en el campo agrario el propio ministro estableció, en una importante reunión celebrada en Nueve de Julio, que los planes del gobierno deben por lo menos estar enderezados

para volver a tener las áreas sembradas de hace diez años, no creo, señor diputado, que podamos convenir que vivimos un período floreciente.

También en oportunidad le manifesté al señor ministro que el hecho de existir en los primeros seis meses fiscales 119.000 protestos, por un valor de 3.600 millones de pesos, significaba que el país no se hallaba en un proceso de estabilización económica.

Comparto personalmente que se deben sanear las finanzas y que el sistema bancario no puede apoyar inversiones que no son productivas. Pero no puedo aceptar bajo ningún aspecto que se esté realizando esa política, porque en la Argentina toda la ejecución de la política económica que desarrolla el gobierno es realizada bajo netas características liberales, aunque los discursos de algunos legisladores, sobre todo los de tipo político, refieran una revolución planificadora de la economía argentina.

El hecho concreto y real es que en el comercio internacional hemos perdido quinientos millones de dólares, y en las áreas de exportación normal de la República, como la del maíz, el año pasado se exportaron 600 millones menos de toneladas.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Suárez. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Creo que las cifras que he citado son elocuentes para desmentir la afirmación de que el país está paralizado, por cuanto si hay un aumento en el producto bruto interno del 5,7 por ciento, ello es de por sí suficiente para demostrar que no hay tal paralización.

El señor diputado acaba de hacer alusión a expresiones del señor secretario de Agricultura. Por supuesto que nosotros, al exhibir esa tasa de crecimiento del año 1961 con respecto a 1960 como un índice altamente promisorio en el desarrollo económico del país, no hemos dicho que se han alcanzado las metas a que todos queremos llegar. Lo cierto es que estamos en vías de un desarrollo sostenido. Tanto es así que últimamente hemos asistido a algunas controversias públicas, en las que han intervenido incluso ex funcionarios de la Nación, donde se le ha impuesto al gobierno seguir una política demasiado acelerada en cuanto a la expansión económica. Y ha sido precisamente el señor presidente de la República quien ha dicho, en uno de sus últimos discursos, que la política de expansión económica de la República bajo ningún concepto será detenida.

No quiero establecer una polémica, pero considero conveniente acotar a las palabras del señor diputado cifras que indican que el país no está paralizado.

Sr. Suárez. — También con estadísticas oficiales podemos decir que en cuanto al costo de la vida el país ha seguido un proceso de retroceso, pues dicho costo va aumentando en forma categórica. Si consideramos el año 1960, advertimos que el índice del costo de la vida, según tales estadísticas, estaba en 3.454,4 en relación

al año 1943, y que subió en 1961 a 3.983,8. Y lo que es más grave, si tenemos en cuenta el promedio de los salarios devengados en estos dos años, advertimos que hubo una disminución con relación a la forma en que ha crecido el costo de la vida. Las cifras oficiales del «Boletín de Estadística» asignan para los salarios en 1960 un índice de 2.980, mientras que para el costo de la vida el índice se encuentra en 3.454. Esto denota que no existe en el país una bonanza económica, como parecería que lo entiende el pensamiento oficial, ya que hay un desnivel entre los salarios y el costo de la vida, que se ha acrecentado en el año 1961. Esto nos hace pensar, con criterio de colaboración y con sentido de responsabilidad, que mediante una buena política impositiva podrían lograrse soluciones a estos problemas en forma sustancial.

En distintas oportunidades hemos dicho que la República debe defender la inversión privada nacional. Teniendo en cuenta las estadísticas, podemos afirmar que en nuestro país las dos terceras partes del rédito de las empresas privadas son reinvertidas en sus programas de desarrollo. Pero el alto índice impositivo y la falta de productividad van afectando sus inversiones, creando una inversión paralela, que a nuestro juicio es la parte fundamental que perjudica a la economía nacional. Esta situación se ha creado por la falta de una política coherente vinculada con las sociedades financieras, que prácticamente están destruyendo el sistema bancario nacional.

El propio ex ministro de Economía doctor Alemann manifestó que cerca de mil sociedades paralelas a las instituciones bancarias estaban actuando en el mercado interno, lo que determina que el flujo normal del dinero hacia las empresas desaparezca. Es sabido que las instituciones normalmente proveedoras de fondos o de crédito son los bancos estatales y particulares, quienes contribuyen al desarrollo de las entidades comerciales e industriales del país. Más grave aún es que los depósitos que fluyen hacia esta clase de sociedades se colocan a una tasa del 3, 3,5 y hasta del 5 por ciento de interés mensual, lo que determina el encarecimiento inmediato de los artículos y productos, tanto sean de primera necesidad como de otro tipo.

Como lo hemos manifestado en distintas oportunidades, consideramos que lo más importante para romper el desequilibrio económico existente en el país es la aplicación de una política inversora racional. Declaro que en este criterio nos hallamos acompañados por las palabras del ex ministro de Economía doctor Alemann, quien publicó un libro intitulado *Cómo superar la crisis económica actual*. El comparte el criterio que sostiene el sector del radicalismo del pueblo con relación a la política adecuada de inversiones que corresponde poner en práctica.

Es de lamentar que el doctor Alemann, cuando estuvo al frente del Ministerio de Eco-

nomía, no haya aplicado una política racional de inversiones en la forma preconizada en el libro señalado.

El problema fundamental de la política impositiva de nuestro país consiste en que lejos de crear una corriente adecuada de inversión de fondos ha ido sustrayendo las inversiones de dinero. Por eso vemos que en un país importante como los Estados Unidos se haya proyectado aplicar a sus contribuyentes una fuerte escala de reducción impositiva mediante un programa bipartidario, es decir, de acuerdo entre los partidos Demócrata y Republicano, modificando sustancialmente el impuesto a los réditos con el propósito de quebrar el estancamiento, que ellos también temen que no permita la capitalización del país.

Terminada la última guerra mundial, los asesores norteamericanos trataron de solucionar el problema económico de los países europeos que estaban en el escenario occidental llevándole iniciativas de vital trascendencia, como las que se desarrollaban en su propio país. El gobierno alemán y el gobierno italiano desecharon en forma categórica las insinuaciones norteamericanas y establecieron escalas impositivas menores que, a nuestro juicio, han tenido éxito. Así podemos señalar que el milagro alemán y el resurgimiento de la economía italiana han obedecido más que nada a que esos gobiernos no han realizado una política extremadamente fiscalista. Ello ha permitido la capitalización de las industrias y del trabajo, tanto en Alemania como en Italia. Recordemos que mientras los Estados Unidos propusieron una escala similar a la imperante en ese país, que en algunos casos llega al 92 por ciento, el gobierno alemán nunca estableció escalas superiores al 57 por ciento en la escala progresiva del impuesto a los réditos. De ese modo pudo realizarse el esfuerzo alemán a través del apoyo y la canalización de recursos hacia sectores que propendieron a una efectiva realización económica.

Por otra parte, es bueno recalcar que el índice inflacionista en la República ha seguido incrementándose en forma tal que lamentablemente ha confirmado nuestra aseveración primitiva. Este gobierno asumió el poder con una emisión aproximada de 60 mil millones de pesos. Producido el plan de estabilización, la emisión adquirió un incremento de gran magnitud, saltando rápidamente a 87 mil millones y ascendiendo sucesivamente hasta llegar en el día de hoy a 136 mil millones. Esto significa que amén de la política impositiva normal realizada por las leyes respectivas, el Estado está gravando a la población con otro impuesto indirecto. En ello coincidimos con el profesor Dalton, quien considera que la emisión es un impuesto indirecto a la producción y al consumo, porque al desvalorizar la moneda y al crear una política que favorece a los especuladores y a los poseedores de bienes raíces, en contra de

los hombres que tienen salarios o ingresos fijos, produce indirectamente un nuevo impuesto.

En este sentido el país está afrontando un impuesto real mediante la emisión, que, como he destacado, ha venido creciendo en forma alarmante.

En la campaña electoral de 1958 denunciábamos que el país estaba en una situación de postulación económica que obligaba a hacer ingentes sacrificios. Desgraciadamente, los acontecimientos demostraron que en todo teníamos razón. Es importante, entonces, analizar aspectos fundamentales de las reformas impositivas necesarias para provocar una modificación del destino del ahorro nacional hacia determinados grupos o actividades. Creemos que la política de desgravación es fundamental en un plan de desarrollo para poder movilizar importantes sumas de capital. Conformes con nuestra pensamiento, presentamos en su oportunidad diversos proyectos de desgravación, a los efectos de ir encauzando el circulante hacia las actividades productivas. Para ello se presentó un proyecto modificadorio del sistema impositivo con relación a la compra de títulos y cédulas hipotecarias, teniendo en cuenta que la reforma de la ley impositiva en el sentido de que no se cobre impuesto a los réditos a los intereses de las cédulas hipotecarias no ha atraído en lo más mínimo a los inversores, por la sencilla razón de que su tasa de interés es inferior en varias veces a la vigente en plaza.

Nosotros sostenemos que mediante una legislación adecuada se puede determinar que de todo ingreso que perciban los contribuyentes de las cuatro categorías que establece la ley puede destinarse un 10 por ciento como máximo para la adquisición de cédulas hipotecarias. El interés de la cédula hipotecaria no sería del 8 por ciento, sino que automáticamente se transformaría en un interés mayor. De esta manera se haría una inversión útil para la actividad económica de la República, y podríamos afrontar un problema fundamental, el de la vivienda, cuya solución reclaman angustiosamente todos los sectores sociales de la población.

A fin de vigorizar la industria nacional —otro problema fundamental a encarar resueltamente—, habría que realizar una política de desgravación impositiva. Podrá argüirse que este problema está contemplado en la ley, pero yo declaro que la solución sólo existe a medias, porque la desgravación viene realizándose desde años anteriores en forma parcial en las leyes de réditos, sin que se haya conseguido la canalización concreta de las actividades económicas de estos sectores. Por ello sostenemos la necesidad de incentivar una desgravación de las utilidades invertidas en toda fuente de energía.

Entendemos que ninguna política impositiva puede estar en desacuerdo con una política de desarrollo. A este respecto afirmo que en el país no existe una política de desarrollo: hasta

hoy se ha dado una serie de manifestaciones, que en algunos casos, podemos pensar, han sido hechas de buena fe, pero en otros casos son evidentemente de tipo político.

El país no tiene una política concreta de desarrollo, y lo dicen las propias entidades empresarias, que entienden que este gobierno, dentro de una línea política económica liberal, diría, debería estar respaldado por esa política de auténtico desarrollo.

Creo que el país progresa por la voluntad de las fuerzas empresarias y a pesar de los gobiernos que no dan a esas fuerzas los elementos necesarios para poder realizar una política importante en el desarrollo económico.

Hemos mantenido y sostenemos la necesidad de conseguir inversiones extranjeras por intermedio de los bancos nacionales, y debemos reconocer que ello se ha hecho en alguna medida, pero no con el sentido práctico que el país requiere. Voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno inglés modificó hace pocos meses el sistema de interés bancario para las cuentas corrientes y de ahorro, elevándolo a un valor tal que ha logrado la canalización del ahorro europeo hacia el depósito bancario del sistema inglés.

Eso demuestra que cuando hay fe en los organismos y una política ordenada y uniforme, los inversores canalizan su dinero hacia fuentes productivas de interés. El ejemplo inglés puede ser de aplicación en la Argentina, sobre todo cuando haya aquí un clima de ordenamiento y pacificación que haga propicia la inversión de capital extranjero.

El caso concreto de inversión que he dado es fundamental porque es el único que requiere tan sólo traslación de circulante, traslación de encanje de divisas, y a la vez evitaría el problema que se produce en el país de afrontar compromisos de tipo internacional que, en definitiva, el país no puede pagar y lleva a importantes empresas a difíciles situaciones económicas.

Por otra parte, las desgravaciones que nosotros proponemos producirán una cadena impositiva, porque lo que se deja de percibir en un sector prácticamente genera nuevas posibilidades económicas. En esta forma el Estado no pierde, porque al destinar dinero a las actividades productivas implícitamente va creando nuevos réditos que han de ser gravados. Igualmente, el capital nacional va autogenerando recursos impositivos que cubrirán las bajas temporarias que puedan producirse.

También es de lamentar que en esta reforma no se hayan contemplado hechos fundamentales, lo cual determina que sigamos viviendo una situación irreal. Por ejemplo, el problema concreto referido a las sociedades anónimas donde el Estado, por un lado, creando un régimen impositivo favorable, trata de fomentar la creación de este tipo de sociedades atrayendo a los inversores y a los empresarios. Pero, por otro

lado, en materia agraria, dicta leyes que están en contra de la constitución de sociedades anónimas. Todo esto disloca las posibilidades económicas del país y desorienta a los hombres de empresa.

Un problema similar se plantea en materia de construcciones. La anterior ley de réditos determinaba la desgravación para los departamentos de propiedad horizontal, porque no se hacía jugar el artículo 3º de la disposición legal. Un criterio similar se seguía con respecto a los planeamientos urbanos destinados a las clases modestas. Este criterio se modifica y en esta forma las clases menos pudientes ven alejarse la posibilidad de encargar en forma directa la compra de los terrenos. De acuerdo con una teoría económica, los impuestos, generalmente, se trasladan sobre los consumidores, y en este caso concreto de las tierras se ha creado un supervalor en las destinadas a las urbanizaciones en los alrededores del Gran Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior del país. Este hecho reconoce como causa fundamental una mala política impositiva derivada de la ley de réditos y de su reglamentación, que ha establecido que el individuo que realiza más de cincuenta lotes debe pagar réditos y no ganancias eventuales. En esta forma se gravita sobre los precios y cada día resulta más cara la parcela de tierra que el hombre de trabajo desea adquirir.

También deseo dejar expresa constancia de que en el mensaje del Poder Ejecutivo se encara como aspecto esencial la modificación del impuesto a las ganancias eventuales. Esto parecería una cosa prudente, pero, en realidad, demuestra una falta de orientación, porque por un lado se soluciona el problema del impuesto a las ganancias eventuales, que daba origen a toda una cadena de evasiones, y por otro lado la materia imponible cae bajo la ley de réditos. La comisión, con muy buen criterio, ha tenido que dejar de lado esa modificación, lo cual determina, en cierta medida, que el mensaje del Poder Ejecutivo pierda su valor porque el hecho sustancial de la reforma ha sido modificado luego del estudio efectuado por la Comisión de Presupuesto.

Como ha dicho el señor diputado Marini, sostenemos la necesidad de gravar las rentas de capital, pero siempre dentro de una organización ordenada y estable. No se puede tampoco crear un régimen impositivo que haga verdaderamente responsables a las sociedades de capital de toda una mala política que ha producido disloques en el campo económico y de la cual, como lo he manifestado en otras oportunidades, es responsable el mismo gobierno, que a través de sucesivas emisiones ha ido deteriorando el salario y los valores reales de los bienes. Nosotros sostenemos la necesidad de un impuesto sobre las ganancias de capital, pero mediante una legislación que contemple los precios rea-

les, a fin de que el Estado no haga a los contribuyentes esa especie de trampa que permite llegar al absurdo de que para determinar el valor de una propiedad se tome en algunos casos el que asigna Obras Sanitarias de la Nación, sobre la base de la renta producida, mientras que en otros se recurre a escalas impositivas que, si bien han mejorado un poco, determinan un deterioro de las posibilidades de esas personas que han realizado ganancias que no pueden ser destruidas por la política fiscalista. En síntesis, sostenemos la necesidad de gravar las ganancias de capital, pero contemplando siempre los valores reales, acordes con el nivel general de precios.

En otra materia, consideramos que debe adoptarse una adecuada política bancaria, como ya en otras oportunidades lo hemos manifestado. En particular, pensamos que debe modificarse el sistema bancario para permitir que, mediante una elevación de los intereses pagados a las cuentas de ahorro, los institutos bancarios estatales y privados puedan hacer frente a la competencia de la banca paralela, que prácticamente está destruyendo sus fuentes de recursos.

En cuanto a las escalas impositivas, entendemos que hubiera sido interesante una rebaja, pero siempre condicionada a la inversión en bienes de capital. Ello produciría un importante movimiento que daría solución inmediata al problema de la falta de liquidez. Por otra parte, quiero dejar esbozado nuestro criterio sobre esa materia, expresando que esa desgravación debería hacerse en forma parcial, sin pasar de un cinco o un diez por ciento de las escalas vigentes, y en un plazo de cinco años, a efectos de que no produzca un impacto demasiado fuerte sobre la situación económica general y en especial sobre el equilibrio presupuestario.

Desde otro punto de vista, es fundamental destacar que en estos momentos en que el Poder Ejecutivo ha dictado una serie de decretos en materia de racionalización administrativa, resulta absurdo aplicar un régimen fiscal severo, desde que el propio gobierno está buscando las soluciones al déficit a través de una dispersión de los funcionarios públicos que no deseo entrar a analizar en forma concreta, porque hace a mi lealtad reconocer que sólo he tenido conocimiento de esas medidas a través de la información publicada en los diarios. De todos modos, pareciera que es propósito evidente del Poder Ejecutivo trasladar parte de la actividad estatal al orden provincial, y en algunos casos a la actividad privada, lo cual es incompatible con altas escalas impositivas, desde que el gobierno parece estar tratando de enjugar el déficit financiero mediante este tipo de soluciones.

Hemos discutido con el diputado Ferreira el problema relativo al impuesto sobre las bebidas sin alcohol. Confieso que no hago aquí una

cuestión de tipo regional desde ningún punto de vista. Lo que ha llevado a un núcleo de diputados a presentar la iniciativa creando este nuevo impuesto es un sentido de la realidad: no podemos pretender desgravar los réditos de la cuarta categoría sin dar al Estado los medios elementales que le permitan hacer frente a esa desgravación.

Deseo dejar expresamente establecido que me allano al criterio de que los zumos o jugos de fruta puros no sean gravados. Los argumentos dados en el recinto por el señor diputado Ferreira y los expuestos en el bloque por los señores diputados Larocca y Perette me hacen comprender que evidentemente no conviene gravar este aspecto de la actividad económica, puesto que esta carga fiscal determinaría una recesión de un importante rubro de la labor industrial del país.

Cumple a mi lealtad reconocer que me allano a esta modificación parcial del proyecto. Pero quiero señalar que de ningún modo puede considerarse que estamos desconociendo la lógica de la política financiera cuando damos al Estado un nuevo rubro impositivo para poder reemplazar en parte el producido de un impuesto que, a nuestro juicio, produce desconcierto en la capacidad empresarial del pueblo de la República.

Poder canalizar el ahorro nacional y dar la posibilidad de la capitalización a los sectores del trabajo deben ser principios fundamentales en todo sistema tributario democrático. Mucha razón tenía un legislador norteamericano cuando expresaba que los impuestos graduales al incipiente comercio y a la incipiente industria son la más grande valla que se opone a la razón de ser americana: «hacer que los sueños se puedan transformar en realidad mediante el trabajo».

En nuestro medio, los sueños de los trabajadores argentinos no pueden cristalizar en realidad, porque el Estado, mediante el impuesto a los réditos del trabajo personal, les quita las posibilidades de capitalización.

Insisto en la necesidad de introducir reformas impositivas que permitan desgravar el trabajo personal. El señor diputado Conte, que es autor de un proyecto sobre esta materia, ya expondrá detalladamente nuestro pensamiento favorable a la desgravación de la cuarta categoría. En mi opinión personal, estimo que el sector de contribuyentes comprendidos en el inciso d) del artículo que establece los alcances de la cuarta categoría debería ser desgravado lisa y llanamente, sin modificar los mínimos no imponibles, ya que una modificación de esta última índole beneficiaría a todos los contribuyentes y con ello a personas que no lo necesitan, y además, reduciría para el fisco el rendimiento de este impuesto.

El profesor García Belsunce, cuyas opiniones han tenido importancia para el gobierno, anuncia una serie de ideas en materia impositiva que

permitirían capitalizar al país, medidas que compartimos. Este autor destaca la necesidad de aumentar los impuestos a las entradas de hipódromos, a las apuestas mutuas y a otros rubros, así como también establecer gravámenes sobre las fichas pagadas por los casinos. Según datos estadísticos aportados por el doctor García Belsunce, en 1958 se habrían pagado 3.500 millones de pesos en fichas. De establecerse un impuesto sobre este rubro se contribuiría a la solución de eliminar como fuente impositiva los réditos del trabajo personal, sin desmedro para la adecuada recaudación del fisco.

Creemos que lo fundamental de una reforma impositiva debe ser la tentativa de aliviar la situación del contribuyente que tiene más posibilidades de coadyuvar al proceso de capitalización nacional. Queremos dejarlo perfectamente establecido. No negamos la situación angustiosa que vive la República. Las estadísticas están demostrando nuestro aserto. Cuando nos oponemos a esta reforma lo hacemos entendiendo que no se han hecho los estudios fundamentales que permitan determinar las posibilidades de realizar una política coherente con los recursos del capital nacional.

Los ejemplos de los Estados Unidos y de los países de Europa occidental deben hacer reflexionar al gobierno de la República sobre la necesidad de defender un poco más el criterio del capital nacional, sin desprestigiar la inversión extranjera. Para nosotros es esencial que la legislación sea en alguna medida conducente a la promoción de la fuerza creadora de la empresa nacional.

También nos oponemos a que se amplíe el sistema del impuesto sustitutivo a la herencia a las sociedades en términos generales, porque ello estaría en contra de los intereses generales de las provincias y sobre todo en contra de la progresividad. En una palabra creemos definitivamente que para lograr el entendimiento del país se necesita orden social y un poco de tolerancia en todas las fuerzas políticas argentinas, pero también no hacer recaer todos los recursos impositivos sobre una parte de la población, acordando un privilegio a las fuerzas extranjeras y olvidando a las argentinas.

Dentro de las ideas expuestas, el radicalismo del pueblo no comparte la posición estructurada en el dictamen. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado Conte.

Sr. Conte. — Señor presidente: días pasados el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Prece, anunció que sobre la mesa hay un proyecto de la mayoría sobre aumento del mínimo no imponible. Aunque soy autor de un proyecto de desgravación total de los réditos de cuarta categoría, por el que hace dos años vengo bregando, pro-

cediendo con amplitud de juicio haré uso de la palabra sólo en el debate en particular, porque no me voy a referir a toda la parte impositiva sino a la que se refiere a los réditos de cuarta categoría.

Sr. Presidente (Decavi). — Tiene la palabra el señor diputado Prece.

Sr. Prece. — No voy a hacer uso de la palabra en la discusión en general, a efectos de abreviar el debate. En consecuencia, si no hubiera oradores anotados haría indicación de que pasáramos a un breve cuarto intermedio.

Sr. Sammartino. — Si me permite el señor presidente, antes de que se pase a cuarto intermedio deseo hablar brevemente en general sobre el proyecto en discusión.

Sr. Presidente (Decavi). — La Presidencia hace notar al señor diputado que en la lista de oradores figuran anotados los señores diputados Prece y Hernández Ramírez.

Sr. Sammartino. — El señor diputado Hernández Ramírez se encuentra atendiendo a un colega enfermo, de manera que yo, aunque mal, lo voy a reemplazar en este momento.

Sr. Presidente (Decavi). — ¿El señor diputado Prece posterga su indicación para luego que haga uso de la palabra el señor diputado Sammartino?

Sr. Prece. — Sí, señor presidente.

Sr. Sammartino. — Reemplazando al señor diputado Hernández Ramírez y haciendo tiempo hasta que él pueda atender al colega enfermo, voy a aprovechar algunas anotaciones y documentos que tengo sobre este problema.

Comenzaré por decir que en el mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de reforma impositiva se afirma que no persigue una reforma sustancial del régimen, sino, simplemente, adaptarlo a las circunstancias y a la realidad que vive el país.

Es lamentable que no se haya perseguido una reforma sustancial del régimen impositivo nuestro, tan vinculado a la economía, a las finanzas y a la situación social del país.

¿Qué persigue esencialmente la reforma impositiva propiciada por el Poder Ejecutivo? Podría sintetizarse su finalidad en la derogación del impuesto a las ganancias eventuales; modificación de las bases imposables de los impuestos a los beneficios extraordinarios y sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes; reestructuración de este último tributo, comprendiendo en su ámbito a las sociedades de personas y empresas unipersonales; supresión de las tasas fijas del gravamen de sellos, del impuesto a los recibos, del sellado de actuación administrativa y judicial, del impuesto a los giros internos y de otros gravámenes con características propias organizados dentro del impuesto de sellos; creación de un nuevo sistema de represión del contrabando de productos que pagan impuestos internos, y perfeccionamiento de las normas

legales de procedimiento para hacer más eficaz el sistema, reprimir la evasión y asegurar el correcto ingreso de los mismos.

El proyecto, como bien se ha afirmado, no busca una distribución equitativa de las cargas, atendiendo a la capacidad contributiva de los contribuyentes, pues atiende esencialmente a una mayor recaudación fiscal en razón de los conocidos apremios y necesidades de recursos del erario público. En vez de ir al fondo del problema, el Poder Ejecutivo persigue una recaudación de cuatro mil millones de pesos sobre la base de una estructura tributaria reñida con los principios de una sana economía, de una auténtica justicia social y de finanzas públicas sustentadas en la liberación de las clases populares y en una mayor contribución de las clases privilegiadas y pudientes, que son generalmente las clases ociosas y parasitarias en toda comunidad humana.

Si necesitáramos configurar el carácter estático de estas reformas en relación con la legislación impositiva y social, bastaría señalar la forma en que se tratan en el proyecto del Poder Ejecutivo algunos problemas, como el de las ganancias eventuales y el del gravamen sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes.

Mientras no modifiquemos nuestra estructura fiscal y nuestro régimen agrario, nuestra economía y nuestras finanzas no se liberarán de los resabios feudales que traban el desarrollo y el progreso nacional, y malogran también el bienestar del pueblo. El mal no es sólo nuestro. Latinoamérica ofrece un panorama dramático análogo. Esa es en buena parte la causa del subdesarrollo y de las convulsiones que perturban la tranquilidad y la paz de América. Se equivocan los que creen que para resolver nuestros problemas fundamentales bastaría la modificación de la política de los Estados Unidos a través del programa de la Alianza para el Progreso. Se equivocan también los que quieren hacer derivar todas nuestras dificultades de la falta de comprensión por los Estados Unidos de algunos aspectos de los problemas de Latinoamérica. En la introducción a un estudio realizado por una escuela sobre problemas de América, de la Universidad de Nuevo México, se pueden leer algunos conceptos muy interesantes y esclarecedores. Yo no resisto a la tentación de hacerlo, con el permiso de la Presidencia, en esta breve disertación.

Dice ese estudio: «Dentro de la estructura neofeudal en que sólo los pobres contribuyen mediante los impuestos indirectos; en que la tierra permanece improductiva debido a los grandes latifundios incultos y a la falta de crédito puesto al servicio del pequeño agricultor; en que no hay poder adquisitivo a causa de los bajos salarios; en que los dueños reaccionarios del capital rehúsan contribuir al desarrollo económico de sus países, ningún plan Marshall para Latinoamérica puede ponerse en práctica antes de que desaparezcan estos vestigios de

una sociedad medieval y se echen las bases para una sociedad industrial moderna.

»La modernización de la sociedad latinoamericana y su desarrollo económico beneficiarán tanto a los pueblos de Latinoamérica como al de los Estados Unidos. Eso sí, la justicia social-económica debe ser lograda sin menoscabo de las libertades democráticas ni de los derechos humanos. Latinoamérica necesita ambas cosas: pan y libertad. Solamente dentro de este marco se puede establecer una sólida unidad hemisférica, una fuerza continental basada en la libertad y la prosperidad y unida contra la miseria y la tiranía. Esta es la condición bajo cuyo poder creador puede realizarse el viejo aforismo aprista "interamericanismo sin imperialismo".»

En este mismo volumen se publica un mensaje de Norman Thomas, el líder socialista de los Estados Unidos, prestigiosa figura de estadista y de luchador democrático que también dice algunas cosas esclarecedoras que voy a leer. Dice así: «Los Estados Unidos son fuertes pero no son ni Dios ni el diablo para trazar el destino de sus vecinos del Sur. Con el nuevo capitalismo y feudalismo opresor que impera en las tierras vecinas se han beneficiado muchos intereses, pero estos intereses no impusieron ningún sistema en Latinoamérica. Los dictadores latinoamericanos han sido a menudo ayudados y muy pocas veces impuestos por Norteamérica. Después de nuestra impía guerra contra México, hace más de cien años, a pesar de algunas intervenciones militares ocasionales a principio de este siglo, los Estados Unidos no han establecido ningún imperio colonial por la fuerza de las armas ni han mantenido sobre nadie un control férreo como el que mantiene el nuevo amigo de Castro, el dictador ruso, sobre sus satélites. No existe ni el más débil paralelo con el sangriento imperialismo de Khrushchev en Hungría, o con el de Mao en Tíbet. Por mucho que protestaran los intereses poderosos, nuestro gobierno no intervino cuando México nacionalizó su petróleo, que por derecho pertenecía al pueblo. Y en los Estados Unidos, la resistencia a una intervención militar a Cuba precedió a la provocadora amenaza de Khrushchev de iniciar una guerra mundial —ni podía ser menos— en lucha por Castro.»

Más adelante dice: «Y esto me conduce a la pregunta más importante que deseo formular: ¿no es cierto que los más grandes enemigos del verdadero bienestar popular en este hemisferio son el crudo capitalismo y también el feudalismo que los países latinoamericanos heredaron o aceptaron y cuyas clases dirigentes han sabido aprovechar en su propio beneficio? Si los Estados Unidos se retiraran completamente, y no hubiera imperialismo norteamericano que atacar, ¿serían esos pueblos verdaderamente libres? Ciertos grandes intereses yanquis que han explotado al pueblo norteamericano han explotado también despiadadamente a los pue-

blos latinoamericanos; pero con el consentimiento de sus gobiernos, quienes han considerado ventajoso (para ellos) política y financieramente, tener al capitalismo norteamericano como ogro o como socio para distraer la atención del pueblo y cambiar la oposición al sistema económico local por la oposición a los yanquis.»

Y continúa: «Yo, por supuesto, no soy un experto en conocer las diferentes leyes y condiciones de las naciones latinoamericanas, pero si mi información es correcta, el impuesto sobre grandes rentas es mucho más severo en Estados Unidos que en la mayoría de esos países. Yo he criticado nuestro sistema federal impositivo en varios puntos; pero es mucho menos regresivo y pesa mucho menos sobre el pobre que el sistema vigente en las potencialmente ricas naciones latinoamericanas, y también el que impera en la Unión Soviética. El impuesto sobre las rentas en los Estados Unidos alcanza el 91 por ciento para las grandes entradas.»

En este mismo estudio, en otro capítulo muy interesante porque contiene una estadística que aclara diversos aspectos del problema, al referirse a la estructura fiscal, se señala que los gobiernos de Latinoamérica han dependido económicamente de los derechos de importación como fuentes de ingreso, que en los últimos años se ha hecho usual el establecimiento del impuesto a la renta y de los derechos de importación. Los impuestos al consumo son también una fuente importante de ingresos en esos países de Latinoamérica, destaca este estudio, y ofrece una estadística sobre el porcentaje de los impuestos directos e indirectos por cada una de estas naciones, que no voy a leer pero de la cual pido su incorporación al Diario de Sesiones a esta altura de mi exposición.

Inserción solicitada

Porcentaje de los impuestos directos e indirectos con respecto al total de impuestos en algunos países latinoamericanos

Países	Impuestos directos	Impuestos indirectos
	% del total	% del total
Argentina	48	52
Brasil	25	75
Colombia	45	55
Costa Rica	28	72
Chile	56	44
Ecuador	21	79
El Salvador	39	61
Guatemala	27	73
Honduras	24	76
México	47	53
Nicaragua	13	87
Perú	34	66
Venezuela	58	42 (1)

Estas cifras nos dan la pauta de la orientación que debe seguir la legislación impositiva

(1) Naciones Unidas, «Economic Survey of Latin America», Nueva York, 1957, página 138.

en una reforma futura, que nosotros queremos que no sea superficial como ésta, sino que vaya al fondo mismo del problema. No es posible implantar un buen régimen tributario en un país que no tiene una economía saludable y finanzas sanas. El régimen impositivo es causa y efecto a la vez de esas finanzas y de esa economía. Es causa de una economía próspera y de finanzas equilibradas porque es fuente de recursos destinados al progreso general y no pesa sobre las actividades útiles a la comunidad; es consecuencia de una progresista evolución económica y financiera porque los países que tienen buena salud en su economía y en sus finanzas no recurren a pesados gravámenes para obtener recursos fiscales. Pero hay algo más que es necesario señalar también concretamente. Una reforma impositiva tiene que vincularse necesariamente, como decía, a una reforma agraria que se refiera y que tome como base de imposición y de recaudación el mayor valor de la tierra libre de mejoras. Esa fuente de ingresos ha sido adoptada por países que pueden señalarlos rumbos en esta materia, como Australia, Nueva Zelandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, y es una orientación que se perfila también en la legislación impositiva de Canadá y de los Estados Unidos.

El impuesto al mayor valor de la tierra libre de mejoras se establece en esos países sobre la base de una valuación que se fija por regiones, que se anota en grandes planillas de catastro y que es exhibida después para el conocimiento y el control de todos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Sammartino. — El impuesto al mayor valor de la tierra libre de mejoras, antes de la segunda guerra y durante la primera guerra mundial, dio grandes recursos a los Estados Unidos. Después se modificó un tanto. Esa legislación está establecida en Dinamarca sobre la base general de un porcentaje del 3 por ciento. Los porcentajes varían en otros países.

Un estudioso de estos problemas dice, refiriéndose al impuesto al mayor valor de la tierra libre de mejoras, que «nuestro sistema fiscal está basado casi exclusivamente, y en todos los órdenes, en los gravámenes al trabajo, capital, consumos. La tierra como tal casi no soporta gravámenes y si los tiene no guardan relación con su verdadero valor. Los efectos de este sistema los estamos palpando. Jamás ha estado nuestra patria más pobre, más desmoralizada, más enferma, con menos perspectivas, a pesar de que muchas cartas han salido a su favor». Y sigue haciendo referencias a este problema, que omito leer para abreviar mi exposición, pero cuya inserción solicito a esta altura del debate.

Inserción solicitada

La pústula maligna del Gran Buenos Aires que en apenas 3.000 Km² de suelo alberga a 7 millones de seres en impresionante hacinamiento, parece que tendiera a perpetuarse como si un país como el nuestro pudiera vivir con semejante tumor devorador.

La Argentina, otrora gran exportador, ha pasado a una insignificante posición. Los pocos mercados que le quedan los está perdiendo en competencia con otros países que producen mejor y más barato.

Para aumentar la producción y reducir los costos el gobierno tendría que tomar varias medidas que le están vedadas por la filosofía económica en la que está enredado. Tendría que desinflar los valores especulativos del suelo y eliminar los impuestos en forma de retenciones que le roban al productor agrario o pecuario entre el 25 % al 40 % de los valores de las mercaderías de exportación.

Pero no quiere ni puede hacerlo.

No quiere porque Frigerio se opone a que se toquen los valores de las tierras. Tiene loteos pendientes para liquidar. Antes de eso mejor vender todo lo que se pueda mercar, incluso la nacionalidad.

No puede, porque sin remover, siquiera en parte, el dique del sistema de la tierra, no se puede sanear el presupuesto, recargado por una multitud de gentes expulsados de la tierra y a los que el gobierno, culpable de este estado de cosas, tiene la obligación de subvencionar. En la Argentina el puesto público es una subvención contra la desocupación forzada.

Para salir de esta *impasse* habría que trasladar gran parte de los actuales impuestos, a la tierra (campo y ciudad). En los Estados Unidos, según datos anteriores a la primera guerra mundial, los presupuestos se cubrían con dos tercios de impuesto a la tierra y el tercio restante con los impuestos indirectos. Actualmente el equilibrio ha variado, pero hay un gran movimiento de opinión que propone restablecerlo. Incluso altos funcionarios del gobierno de *mister Kennedy* han manifestado su anhelo de ver concretada en hechos una política nueva y sana para la tierra por conducto del impuesto al valor con exclusión de mejoras.

A esta salida tan justa y razonable que no lastimaría a nadie, impondría justicia y restablecería el orden jurídico, basándolo en la moral, se oponen los reaccionarios de derecha y los comunistas, unidos contra el interés del pueblo.

Mientras las estadísticas oficiales nos presentan un cuadro casi edénico de desbordante optimismo, la Unión Panamericana, organismo dependiente de la Secretaría General de la OEA, nos revela que en el período 1959/60, solamente Bolivia nos aventaja en el índice de aumento del costo de vida.

La capacidad contributiva ha disminuido en los países que acusan un aumento desproporcionado del costo de la vida. Por eso la referencia que hago tiene vinculación con el tema, y es de desear que el Poder Ejecutivo, en los planes de su política de desarrollo, tome medidas concretas y urgentes para que este índice, que tiende a aumentar dramáticamente, disminuya y entonces aumente la capacidad contributiva de la población.

Hace poco más de un año, un informe publicado por The First National City Bank of

New York nos coloca en el cuarto lugar entre los países del mundo en los que la moneda alcanzó la mayor depreciación en el período comprendido entre 1949 y 1959.

Tampoco me voy a referir a este problema económico, de tanta gravitación en el régimen tributario, para no extender demasiado esta exposición. Pero quiero hacer referencia a algunos conceptos emitidos por el diario «La Prensa» con respecto al problema de la desvalorización del peso y su incidencia en el régimen tributario.

Dice así un editorial de ese diario: «Sin embargo, el fisco nacional parece ignorar que nuestro peso vale hoy tan sólo una onzava parte de lo que valía en 1949, o sea 9 centavos. En ese año los réditos netos imponibles superiores a cinco mil pesos anuales abonaban, además del 7 por ciento, un adicional que se calculaba de acuerdo con una escala progresiva. Para sobrepasar ese límite —después de deducir el mínimo no imponible y las cargas de familia— era necesario tener entradas de alguna consideración, por lo que podía decirse que la tasa adicional sólo alcanzaba a las personas pudientes, y en cuanto a los réditos derivados del trabajo personal en relación de dependencia, a los que percibían buenos sueldos. En la actualidad, reducido el peso a la onzava parte de su valor en 1949, los sueldos han ido acomodándose a tan fuerte depreciación, pero la escala progresiva que mencionamos, si bien es menos gravosa, está lejos de haber seguido el ritmo de la desvalorización monetaria.»

Felizmente, se propone en la reforma que considera la Cámara una modificación del impuesto a los réditos de la cuarta categoría, que puede aliviar la carga que sufre la mayoría del pueblo.

Todos estos factores, sobre todo la capacidad contributiva popular, deben tenerse en cuenta para una reforma orgánica de nuestro sistema impositivo. Para mí, este proyecto no lo ha hecho, y por eso merece nuestra crítica constructiva, encaminada a lograr que en un futuro inmediato la Cámara considere un proyecto de fondo sobre reformas substanciales a nuestra legislación impositiva, tan vinculada, insisto, a nuestra economía, a nuestras finanzas y a nuestro progreso social. Solamente en esa forma lograremos que esa reforma se traduzca en un mayor progreso y prosperidad, no solamente para nuestras finanzas, sino también para la situación económica del pueblo argentino.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Adrogué.

Sr. Adrogué. — Lamentablemente, cuando el día viernes el señor presidente dispuso el pase a cuarto intermedio, entendí que sería hasta las 17. Esta es la razón por la cual acabo de hacerme presente en el recinto de la Honorable Cámara. Al igual que hice el día en que se inició la consideración de esta iniciativa, me

hubiera agrado escuchar todas las disertaciones pronunciadas por los señores diputados para apreciar la información que ellas contienen, y poder formular alguna observación que considerara conveniente. De todas maneras, y dejando a salvo este aspecto, voy a decir algunas cosas hablando en general de la reforma impositiva. Algunas de mis observaciones se referirán a temas propios de la discusión en particular, pero he de hacerlas para adelantar el debate y en la esperanza de que los integrantes de la comisión las tengan en cuenta, si es que las encuentran convenientes.

Los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra han abordado los aspectos generales de la reforma impositiva. Por mi parte debo decir que he de formular a esta reforma un reparo que puede ser considerado de forma, pero que yo estimo tan importante como para que sea conceptuado como un reparo de fondo.

En estos momentos la Honorable Cámara de Diputados en uso de la atribución que le confiere el artículo 44 de la Constitución Nacional, es Cámara originaria; pero tratándose de contribuciones, la complejidad del problema exige que esta tarea esencialmente esté en manos de expertos que se manejan con un conocimiento cabal de la enorme cantidad de disposiciones que rigen en nuestro país en materia impositiva y que constituyen un problema aun para los mismos especialistas.

No tengo conocimiento de que este proyecto del Poder Ejecutivo haya emanado de una comisión de expertos, públicamente conocida, ni que se hayan auscultado las inquietudes de la propia Dirección Impositiva...

Sr. Secretario de Hacienda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Adrogé. — Con el mayor gusto, señor secretario, porque posiblemente me aclare un error en el enfoque del problema.

Sr. Secretario de Hacienda. — Este proyecto, señor diputado, ha sido elaborado con la colaboración de las dos fuentes de expertos más serias y responsables que pueda tener la administración: la Dirección General Impositiva y la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda. En ambas direcciones hay funcionarios con muchos años de experiencia, que tienen un cabal conocimiento de la materia impositiva.

Sr. Adrogé. — Desde luego, tengo un profundo respeto para los funcionarios que han intervenido en la redacción de los proyectos. Pero cuando me he referido a lo que entiendo por expertos en la materia, incluyo al funcionario que conoce a fondo su cometido porque está dentro de la administración, aunque es ineludible tener también en cuenta al experto que es ajeno a la administración nacional pero que está en contacto directo con los problemas del país; así como a los técnicos que puedan

destacar los sectores interesados en la mejor elaboración de una reforma impositiva, es decir, todos aquellos que conocen en profundidad la materia, de acuerdo con las valiosas recomendaciones formuladas al respecto en la reciente Conferencia Latinoamericana de Administración Tributaria. ①

Destaco, pues, el respetuoso homenaje que rindo a quienes han intervenido en la elaboración del proyecto, aunque en su momento señalaré errores, si se quiere formales, pero de una magnitud tal que hablan de la cierta ligereza con que algunos expertos se expiden. Por ejemplo, en el proyecto se citan leyes que han sido derogadas, o se incluyen dentro de las exenciones las contribuciones contempladas en una ley que ya no está vigente en el país. Hay varias observaciones de este tipo, que señalaré cada una en su momento.

De todas maneras, éste no es pura y simplemente un proyecto de reforma impositiva, que pudiera creerse que es sencillo. Se acomete la reforma de más de dieciséis leyes orgánicas y se introducen alrededor de ciento veintidós modificaciones, sustituciones o supresiones, a tal punto —y vuelvo al primer tema— que hace exigible la compulsa de opiniones y no la reserva de los gabinetes. ②

Sé que ha habido oportunidad para que entidades que se ocupan de estas cosas y que están afectadas, se hayan pronunciado, pero no ha habido la oportunidad amplia y grande que debe darse para un complejo de esta naturaleza. Evidentemente —y me permito hacer llegar la sugerencia al señor secretario de Hacienda—, la tarea debe ser realizada por especialistas y no por meros aficionados como somos muchos de los diputados, que por obligación constitucional tenemos que pronunciarnos y por ello estamos obligados a abocarnos al estudio del problema aunque sepamos poco acerca de él, por lo menos en lo que al diputado que habla se refiere. ③

Urge, por ejemplo, llegar a la codificación siquiera parcial del derecho tributario. No es posible que, aun siendo especializado, haya dificultad grande en acercarse a los textos legales en vigencia. Es necesaria la oportuna coordinación y reglamentación sobre todo respecto a las disposiciones numerosas y dispersas. Comprendo que se ha hecho mucho en los textos ordenados. Se ha hecho mucho también en estos últimos años al encomendar a la Dirección General Impositiva la aplicación de una serie de leyes que antes aparecían dispersas en otros órganos de aplicación. Pero creo llegado el momento de acometer en esta materia, en el transcurso de este año, un estudio integral para llegar a un código fiscal que haga realidad aquella presunción básica de que la ley es conocida. Afirmando que en materia impositiva

la ley es casi totalmente desconocida, por lo menos para el público en general.

Antes de adelantar en el camino de mi exposición, quisiera decir pocas palabras para fijar mi pensamiento acerca de algo que se ha expresado en este recinto.

El proyecto del Poder Ejecutivo suprimía el impuesto a las ganancias eventuales. La comisión ha dejado las cosas como estaban, y creo que ha hecho bien. En mi opinión, el impuesto a las ganancias eventuales o ganancias de capital, lo que los anglosajones denominan *capital gains*, tiene sentido en general y sobre todo en situaciones más o menos estables, no en momentos de gran inflación. No quiero abrir polémica al respecto, porque no es ésta la oportunidad; pero hay distinguidos estudiosos que ven la necesidad de ese gravamen en momentos de inflación, porque dicen que en definitiva ella no es sino un impuesto más. Así, el distinguido profesor italiano Cosciani se expide en esos términos. Entre nosotros, el profesor Dino Jarach, argentino por nacionalización, incorporado al estudio a fondo de los problemas impositivos, y a quien rindo al efecto expreso homenaje, también manifiesta que la inflación no juega más que como un mero impuesto, porque en definitiva importa quedarse con una parte sustancial del patrimonio de aquellos a quienes afecta, principalmente quienes viven de su sueldo, de intereses o de otros ingresos fijos. Aparecería entonces como necesario el impuesto a las ganancias eventuales, para restablecer la igualdad para aquellos sectores no afectados por la inflación, que integran en primer término los propietarios de inmuebles y aun los tenedores de valores mobiliarios. Esto último no ocurre en nuestro país por una situación especial y excepcional a la que algún día habrá que considerar la posibilidad de ponerle término.

Lo cierto es que, en opinión de los autores citados, mediante el impuesto a las ganancias eventuales se opera una nivelación, porque también se grava a aquellos que han resultado beneficiados por la depreciación monetaria. Pero a mi juicio se equivocan, dado que ello importa pura y simplemente una igualación hacia abajo en la que se deprime a todos porque hay un sector que está deprimido, en lugar de hacer a la inversa, tratando de igualar hacia arriba.

En esta materia cabe apuntar también la opinión de personalidades tan serias como John Due, profesor de la Universidad de Illinois, que colaboró eficazmente en el estudio de los diversos problemas considerados en las Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal que se han mencionado. Due defiende las *capital gains*, pero —advierte— siempre que no estemos, desde luego, en la simple pérdida del valor de la moneda, porque en ese caso pierde su verdadera sustancia, que es, precisamente, hacer

contribuir a aquellos que se benefician por el esfuerzo de todos en virtud del aumento que su capital experimenta en razón del incremento de los valores económicos generales del país por el esfuerzo de los demás, y por eso se habla de «utilidades no ganadas», en el sentido de que no están dadas por el propio esfuerzo en esos casos concretos.

El profesor Massoin, que también ha sido citado en este debate, advierte así mismo que el impuesto a las ganancias eventuales es útil, pero, precisamente en este supuesto; en lo demás es un impuesto puro y simple al capital, un gravamen más que puede importar un incentivo a la no capitalización.

A título informativo y para concluir con el examen de este tema, diré que en los Estados Unidos existen las *capital gains*, con una tasa del 25 por ciento; pero como advierte el profesor norteamericano John Due, en Canadá no existe semejante impuesto por el propósito deliberado de la administración de facilitar el incremento del capital y con ello del nivel general de la economía. En Inglaterra también puede decirse que el gravamen no existe en la forma directa de un impuesto a las ganancias eventuales, aunque en muchas de sus variantes hay cierta predisposición a incluir como un rédito más a algunas ganancias de capital.

Quiero dejar establecido que mientras el proceso inflacionario argentino no aparezca totalmente detenido me parece que está bien el impuesto a las ganancias eventuales con la tasa del cinco por ciento, más que nada para mantener en actividad a cierto sector de funcionarios de la Dirección General Impositiva que examinan, controlan y entran en la práctica y el mecanismo de este impuesto cuya aplicación tiene sus dificultades. En el cálculo de recursos del presupuesto este rubro aparece con un rendimiento que oscila alrededor de los 480 millones de pesos, y como digo, considero que está bien que este rubro de la imposición continúe subsistiendo.

Antes de entrar al análisis particularizado de algunas disposiciones de este dictamen, quiero recoger manifestaciones del señor secretario de Hacienda, para fijar mi posición personal en una importante materia. Con esto no quiero polemizar con el señor representante del Poder Ejecutivo, y ello por un doble motivo: porque no me considero con la capacidad y la especialización suficientes para abordar el tema en profundidad —capacidad y especialización que seguramente tiene el señor secretario— y porque el tema es, desde luego, lateral.

Deseo afirmar que, en mi concepto, ha llegado el momento en que el principio clásico y ortodoxo de la restricción del crédito como medida antiinflacionaria está dejando de tener en el país la posibilidad de una aplicación práctica y constructiva. Con el simple ánimo de dejar establecido mi punto de vista, y sin el propósito de provocar una réplica, deseo recordar que el se-

ñor secretario de Hacienda ha dicho que en el país hay sectores no populares que preconizan la inflación y se muestran proclives a que el proceso se desate a través del aumento de los créditos. Por mi parte, creo que el fenómeno a que está asistiendo el país está caracterizado por esta angustia de los productores, que ya ha llegado en la provincia de Entre Ríos a tener exteriorizaciones que he visto a través de los diarios y de un proyecto presentado por distinguidos diputados de mi sector, en las que se manifiesta la imposibilidad de la financiación inmediata de las cosechas de lino, provocada en buena medida por esta circunstancia.

Por otra parte, es público y notorio que en la provincia de Buenos Aires —donde algún conocimiento tengo— a los chacareros no les llega el dinero del trigo que ya han entregado, porque las cooperativas agrarias, los compradores en general o los exportadores no tienen o dicen que no tienen el dinero necesario. No entro a considerar en profundidad el tema, pero formulo mi reserva con respecto a la observación que hizo los otros días el señor secretario de Hacienda, en el sentido de que la prueba de que existía dinero en abundancia residía en la compra de dólares realizada a raíz de la renuncia del señor ministro de Economía, doctor Alemann.

Yo digo que cincuenta o sesenta millones de dólares no tienen un significado definitorio al respecto, porque es una masa de dinero que siempre está en manos de aquellos que esperan el momento oportuno, o que atisban el negocio, o que se encuentran bajo los efectos del pánico de tipo psicológico, porque, evidentemente, y no en balde —sin entrar al fondo del problema, porque no corresponde tocarlo—, cuando los ministros de Economía renuncian se operan estos impactos en el país. Yo no creo que haya exceso de dinero porque el Banco Central haya tenido que vender cincuenta millones de dólares.

Los otros días el señor secretario de Hacienda se refirió a uno de los procedimientos que podrán aplicarse. Si bien él no lo dijo, entiendo que podría ser un redescuento selectivo para aplicar a determinado tipo de actividad. No sé si la Junta Nacional de Granos no debería ser dotada de los fondos necesarios para realizar los pagos a los agricultores, con el compromiso inmediato de cancelar e incinerar el dinero por los documentos entrados por la vía de los descuentos para atender ésas o algunas otras necesidades.

El señor secretario se refirió a la factura conformada como medio de seleccionar el crédito, y yo advertí que me parecía que podría ser útil, pero no lo consideraba conveniente en su forma obligatoria, pues importaba nada más y nada menos que la sustitución de los pagarés en los créditos a más de treinta días. Creo que en esta materia los especialistas deben profundizar y considerar si hoy día la masa de dinero en cir-

culación, en su poder adquisitivo, equivale a la masa de dinero en circulación, con su poder adquisitivo, de hace diez o quince años.

Según la política del gobierno —no lo admito, pero acepto por vía de hipótesis que se encuentre en marcha un desarrollo económico del país—, se está diciendo que, en proporción, debe haber mucho más circulante hoy que el que había hace diez o quince años. Y desde una calificada esfera, en alguna mesa redonda, se hizo la afirmación de que hay menor cantidad de dinero para adquirir la misma cantidad de bienes que el que había hace diez o más años atrás. En todo caso, salvada mi opinión, prosigo con la consideración de algunos aspectos de la ley impositiva que estimo útil destacar.

He dicho que se trata de 122 ó más modificaciones que se relacionan con por lo menos dieciséis leyes. La primera de ellas es la relativa a los procedimientos para la aplicación y la percepción de los impuestos. Como dije, importa un adelanto para el régimen impositivo del país la circunstancia de que en la Dirección General Impositiva se centralice la aplicación de las diversas leyes impositivas, y esto significa un paso para la posibilidad de la codificación integral, que nos permita, en un solo texto orgánico, tener toda la tributación nacional, o lo sustancial de ella, en forma clara y objetiva.

Me permito señalar, a los efectos de que por lo menos en la discusión en particular se suministre algún informe que pueda considerarse capaz de abonar el punto de vista de la reforma, que no creo conveniente la introducción en la ley 11.683 de la disposición por la que se modifica el artículo 28, dándole más facultades a la Dirección General Impositiva para fijar anticipos. Lo que ocurre en la actualidad, de que la Dirección General Impositiva pueda exigir en el año que no ha terminado un anticipo de acuerdo a lo que ha ocurrido en el año anterior, se amplía y se extiende a la fracción transcurrida del período fiscal no sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediatamente anterior, sino también en base a otros índices, tales como rentas, capitales, ventas, importes de suministros o inversiones. Esto coloca a los contribuyentes en la necesidad de pagar anticipos de réditos que la Dirección General Impositiva sospecha que han de tener lugar, pero que no tienen el abono que existe en el caso del anticipo en materia de réditos, que se fija en base a los ingresos correspondientes al año anterior.

Por otra parte, en momentos de tanta escasez monetaria, este anticipo, que ha de abonarse en efectivo, salvo el régimen que pueda acordar la Dirección Impositiva en materia de plazos, significa un drenaje anticipado de dinero que no encuentro conveniente y que, sobre todo, no se basa en algo que haya realmente acaecido. Comprendo que la Dirección Impositiva ya ha avanzado directamente en este tema y que tal

vez dentro de este rubro se encuentre ese siete por ciento de anticipo que en el impuesto a las ventas se exige a los importadores. Probablemente esto venga a legalizar esa situación o a darle un respaldo mayor al que la Dirección Impositiva puede tener en alguna de las disposiciones de la ley de impuestos a las ventas y de su reglamentación.

También observaría, a los efectos de que se tome en consideración, que en el artículo 46 se introduce una modificación en punto a la calificación como defraudación en el caso de que el obligado a retener el impuesto no haga entrega inmediata del importe a la Dirección Impositiva. Antes se consideraba como defraudación fiscal a esa omisión cuando provocaba un evidente perjuicio fiscal. Así lo hacía el proyecto del Poder Ejecutivo que exigía el evidente perjuicio fiscal para que estuviera caracterizada la defraudación, porque puede darse el caso de que el agente de retención no haya actuado y el contribuyente haya hecho el aporte. Entonces, fuera del perjuicio fiscal se produce una defraudación de tipo tributario. En esto creo que la disposición pertinente del despacho de la comisión, que excede lo proyectado por el Poder Ejecutivo, tendría que dejarse sin efecto y sustituirse por el texto originario.

El otro día dialogamos con el señor secretario de Hacienda respecto del artículo 91, en lo relativo al cobro oficial de los impuestos e intereses, que se hace por la vía del apremio del título 25 de la ley 50. Y resulta que dentro del régimen actual esa resolución dictada por el juez competente no es apelable ni para el fisco ni para el contribuyente, a quienes sólo queda el juicio ordinario respectivo. El proyecto del Poder Ejecutivo quiere que haya apelación para el fisco, pero no quiere que la haya para el contribuyente.

Señalo la desigualdad existente, porque la observación que hiciera el señor secretario de Hacienda en punto a que la ley 11.683 acuerda al contribuyente la manera de defenderse con otras normas y en otras instancias, no es el caso de esta situación, en que se trata de un juicio de apremio, donde las únicas excepciones que valen son la falsedad del título, la falta de personería, el pago, la transacción o el compromiso. Posiblemente ha de haber ocurrido que los cobradores fiscales hayan sido afectados por alguna excepción resuelta a favor del contribuyente en algún juicio. Ahora se quiere modificar esa posibilidad y se quiere acordar apelación al fisco. Entiendo que si ella se acuerda al fisco también debe acordarse al contribuyente.

—Suena la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Adrogué. —Creo que hay alguna otra observación de fondo dentro de estos deshilvanados retoques que estoy haciendo con relación al fondo del asunto.

El proyecto del Poder Ejecutivo que acepta la comisión, en el numeral 29, al final de la ley 11.683, establece que «En los casos de intimaciones notificadas y multas aplicadas que no estuvieran firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley serán de aplicación las normas de recargos y multas contenidas en la legislación anterior.» Es decir que si media una intimación notificada o una multa aplicada no firme, se aplican los recargos y multas de la ley anterior. En cambio, si no existe intimación se aplica la ley nueva por una infracción anterior. Si no se aplicó la multa, también se aplica la ley nueva.

Las infracciones cometidas antes de la vigencia de la nueva ley deben regirse por la ley anterior, que es más benigna. En materia de multas no es dudoso que estamos en el campo de la pena, y entonces el artículo 18 de la Constitución Nacional nos está aconsejando prudencia para establecer que los nuevos recargos o penalidades jueguen para las infracciones cometidas durante la vigencia de la ley anterior, sobre todo con este galimatías del artículo, que admite la aplicación de la nueva ley en unos casos y en otros no, según que el procedimiento haya o no avanzado, cosa que no corresponde ni está ajustada a lo que debe ser.

Por otra parte, frente a la ley 11.682 de réditos, como se enunció en el curso del debate y se publicó en los diarios, son conocidas las inquietudes recibidas por la comisión con referencia a las exenciones relativas al trabajo personal. Sobre esta materia no voy a insistir, porque estoy en la línea del proyecto de ley presentado por el señor diputado Conte. Pero tal vez, como aporte —no sé si se ha hecho, porque, como lo dije, no he escuchado las exposiciones realizadas hoy—, yo traería a consideración de los señores legisladores lo que ocurre con nuestra ley impositiva en comparación con la ley norteamericana.

Todos sabemos que el máximo de la ley americana llega al 91 por ciento, y que el nuestro se detiene en el 54 por ciento, por el juego del 9 por ciento básico más el agregado de los adicionales. Pero es bueno traer a colación un cálculo hecho en la obra del profesor John Due de la Universidad de Illinois. El distinguido profesor argentino Reig, de la Facultad de Ciencias Económicas, hace un análisis demostrativo de cómo son extraordinariamente más pesadas las contribuciones que paga el argentino que el norteamericano en sus respectivos países por aplicación de la ley de réditos hasta determinado nivel. Así vemos que, anotando la obra de Due en la traducción de 1961 editada en el país, el profesor Enrique Jorge Reig nos dice en la página 137 que hasta 700 mil pesos de ingreso el contribuyente argentino está gravado más que el contribuyente norteamericano. Así en la Argentina frente a 525 mil pesos, según su cálculo, se paga el 49 por ciento y en los Estados Unidos sólo el 30; en la Argentina, 700 mil pesos pagan el 49 por ciento

y en los Estados Unidos el 38 por ciento. Es sólo a partir de 1.750.000 pesos de ingreso anual que la relación se invierte, ya que es de 51 por ciento entre nosotros y de 59 por ciento en los Estados Unidos, para llegar en nuestro país a un máximo del 54 por ciento a partir de una cantidad superior, en tanto que en los Estados Unidos alcanza al 91 por ciento.

Claro que la equivalencia que hace el doctor Reig se puede discutir, porque es difícil apreciar comparativamente el poder adquisitivo interno de la moneda y el nivel de vida de cada país; pero él toma un dólar por cada 35 pesos y comparando las escalas llega a ese resultado. Imaginémonos el resultado a que se llega tomando por base el dólar a 83 pesos en lugar de 35. Vale decir que en los Estados Unidos la renta personal paga mucho menos en los niveles bajos que en la Argentina. Razón de más para justificar la inquietud recogida por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto en nombre de la mayoría de la comisión, que nos ha propuesto algo que es un primer paso que espero que en la discusión en particular pueda llegar a una cantidad mayor ante argumentos suficientemente poderosos que han de poder darse.

Yo diría que todo el proyecto que se considera en este momento tiene un valor sustancial en punto a una materia que no es propia de la ley de impuestos y, sin embargo, está incorporada en esta ley en varias disposiciones. Me refiero a las medidas que se han proyectado para facilitar la intervención de la justicia en la represión del contrabando en lo que respecta a la reforma de la ley de aduanas. Evidentemente, poco tiene que ver con la ley impositiva. Sin embargo, no sé si esa reforma es todo lo completa que debiera ser; no se si se ha consultado —espero que sí— a los funcionarios especializados para haber dado con las soluciones más acabadas; pero sirva esto para que exprese mi complacencia por esta reforma. A mi vez deseo aprovechar para rendir el homenaje que debo a distinguidos magistrados judiciales que integran la sala en lo criminal de la cámara federal de la Capital de la República porque con ocasión de aplicar en una oportunidad la ley de aduanas en sus artículos 15 y 16 se vieron obligados, siguiendo una antigua jurisprudencia de la Corte Suprema, a dar una interpretación bastante razonable —yo no digo que no quepan otras— de la ley de aduanas, cuando dijo que era previo el pronunciamiento de la aduana a la intervención de la autoridad judicial. Ya veremos en la discusión en particular cómo se remedia esta situación. Pero quiero desde ahora señalar que aquella resolución tomada por esa sala en lo criminal y correccional el 26 de abril de 1960, que levantó tormentas en el país y que casi enlodó la figura de los tres magistrados que la integran, merece, ya que llega la oportunidad, más ex-

presiones del mayor respeto y consideración hacia sus firmantes, los doctores Ambrosio Romero Carranza, Hernán Juárez Peñalva y Enrique Ramos Mejía.

De ahora en adelante, la justicia no tendrá la cortapisa que establecían los artículos 15 y 16 de la ley de aduanas, que han de reformarse para dar inmediata intervención a la autoridad judicial, la cual, combinada con una eficaz acción policial, podrá contribuir en cierta medida a combatir la lacra del contrabando, que, lamentablemente, se realiza en el país.

Agradezco la benevolencia con que se me ha permitido decir muchas cosas en exceso del tiempo que el reglamento me acuerda. Pero para terminar voy a decir algo que he dejado para el final porque traduce el profundo sentir de mi espíritu: lamento profundamente que ni el Poder Ejecutivo ni la mayoría de la Comisión de Presupuesto hayan encontrado la posibilidad de encauzar al país en la línea de sus instituciones.

Digo esto porque parece paradójico lo que estamos realizando. Yo diría que es éste, el nuestro, un trabajo pueril, ya que las leyes en vigor de impuestos a las ventas, de retenciones y recargos a las exportaciones e importaciones, respectivamente, están en manos exclusivas del Poder Ejecutivo, por una delegación inconstitucional, a mi juicio, de facultades que el Congreso ha venido haciendo de un tiempo a esta parte.

Yo no hago una cuestión de tipo político, ni pretendo enjuiciar al presidente de la República en su política de desgravaciones y gravaciones y en el manejo de los recargos y las retenciones, así como también a las exenciones y recargos al impuesto a las ventas, ya que está autorizado por disposiciones legales de una amplitud y generosidad tales que a mi juicio trascienden el principio básico del régimen republicano argentino, que exige una elemental división de funciones y atribuciones asignadas a organismos separados unos de otros. Es así como el Poder Legislativo es el que debe intervenir en la determinación de situaciones referentes a contribuciones, y por algo dice el artículo 17 de la Constitución Nacional que sólo al Congreso incumbe establecer las contribuciones mencionadas en el artículo 49 de nuestra ley fundamental.

Sé perfectamente que este tema de la delegación de facultades ha sido y es motivo de profundas discusiones. También sé que en 1960, en las jornadas de Ciencias políticas habidas en ocasión del sesquicentenario en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, a la cual concurrieron muchos de los especialistas en derecho público más eminentes del mundo, se discutió a fondo este problema de la delegación de poderes, y tuve oportunidad de hacer uso de la palabra defendiendo la necesidad de que esto no exista en la extensión en que se está efectuando en nuestro país. Por algo los Constituyentes de 1853,

en el artículo 29, dijeron que los legisladores no debían poner la fortuna de los argentinos en manos de persona alguna. Comprendo que tal vez no es el caso de la aplicación de este artículo 29, pero desde el fondo de la historia se nos está advirtiendo sobre la necesidad de contemplar ese problema, y por ello, a mi juicio, la Comisión de Asuntos Constitucionales debió considerar un sabio proyecto de resolución presentado el día 14 de abril de 1961 por el señor diputado Blanco y suscrito por los señores diputados Contín y Belnicoff, en el que se encomendaba a dicha comisión el estudio y redacción de un proyecto de ley por el cual se restaure el principio constitucional de la división de poderes en materia fiscal, tributaria e impositiva. En dicho proyecto se establecía que la comisión procederá al examen de toda la legislación actualmente vigente sobre esta materia y propondrá las normas legales pertinentes que se adecuen al principio de la Constitución Nacional, por el cual la fijación de las cargas fiscales es atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación.

Esto es en definitiva la concreción, todavía válida, del pensamiento de Montesquieu, que supo ver en las instituciones inglesas del siglo XVIII la sabia vigencia de este principio de la división de poderes. Los americanos del Norte supieron dar a este criterio forma escrita y lo incorporaron a su texto constitucional, dando al Poder Legislativo la atribución para fijar las contribuciones. Por nuestra parte también debemos hacer lo mismo y volver a considerar esto como parte del ejercicio de la libertad, porque solamente el principio de la igualdad no basta. Esto mismo ha sido señalado por Alexis de Tocqueville, el gran estudioso de las instituciones públicas, quien hace más de un siglo manifestó que la igualdad por sí sola es capaz de hacer llegar al despotismo, porque entre todos iguales podemos encontrarnos con el Estado que todo lo domina, y esto es despótico por más que no se encuentre consagrado el principio de la desigualdad. Para que la igualdad sea firme es necesaria la libertad, la que se esgrime y aplica a través de las instituciones que permiten al pueblo dar su voz, su voto, en estas cuestiones fundamentales.

El país está asistiendo, no sólo en el orden tributario, a una delegación total de funciones que descoloca a nuestra Carta Fundamental frente a la realidad. En la actualidad, en ejercicio de pretendidas atribuciones que el Congreso le habría dado constitucionalmente al Poder Ejecutivo —a mi juicio no ha tenido facultades para hacerlo, como lo hemos puntualizado cuando se discutió la ley de presupuesto—, estamos viendo que no hay una institución del país que pueda resistir los decretos de racionalización, la aplicación de disposiciones que obedecen al criterio de funcionarios que las estudian y debaten en el secreto de las deliberaciones de los despachos y no a la luz pública.

¿Cómo es posible siquiera que se amague con la derogación de instituciones tales como el Banco Hipotecario Nacional, que ha nacido por ley del Congreso, cuya evolución ha sido seguida por todo el país, que está encarnado con la institución? ¿Cómo es posible que el señor presidente de la República pueda estar autorizado por ley del Congreso para modificar, para destruir eso y todo lo demás? ¿Cómo es posible que se efectúen compras por cuatro mil y más millones de pesos sin licitación? ¿Por qué? Porque la ley ha delegado facultades en el presidente de la Nación. Es contra esto que me levanto y que pido que el pueblo argentino, por el órgano de su Parlamento, vuelva a encauzar las cosas como corresponde.

Observarán los señores diputados que no pido que eso se haga de la noche a la mañana, aunque tal vez fuera lo mejor, pero lamento que el proyecto del Poder Ejecutivo y el dictamen de la comisión no hayan comenzado siquiera a contemplar la posibilidad de que la fijación de ciertos gravámenes esté en juego con la realidad del país, porque un recargo, una desvalorización monetaria, una reforma cambiaria o un incremento en el impuesto a las ventas, todo eso da lugar a un posible colapso para unos y al auge para otros, sin el control del estudio reposado y sereno del Parlamento.

Discúlpeame si he puesto algún énfasis en esta materia, porque creo que ello no es, en definitiva, sino una aplicación del principio de la libertad. Hoy mismo leía un comentario aparecido en el diario «La Nación» de ayer, en el que ese fino espíritu que se llama José Blanco Amor nos dice, refiriéndose a Francisco Romero, cómo «esta América caótica, que casi siempre se niega a reconocerse en quienes la representan con mayor autoridad y fidelidad, devuelve al mundo de la cultura en las ideas y las palabras del maestro argentino una lección de cordura y de alerta para el destino de la libertad del hombre, del individuo».

Por mi parte termino, señor presidente, con la invocación de las palabras del inmortal Goethe, que nos decía ya hace muchos años que sólo merece vida y libertad aquel que la conquista y la defiende día a día. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Sammartino. — Pido la palabra para una breve aclaración.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Sammartino.

Sr. Sammartino. — En el curso de mi exposición afirmé que los impuestos indirectos al consumo, al trabajo y al capital productivo eran en la mayoría de los países de América la mayor fuente de gravámenes, y sostuve la necesidad de incorporar, en una reforma impositiva futura, el principio del impuesto al mayor valor de la tierra libre de mejoras.

Quiero aclarar, para no aparecer desconociendo un principio fundamental de nuestro régimen federal, que ese impuesto es del resorte de las provincias. Lo estableció, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el progresista gobierno del doctor Sabattini. Pero es posible su incorporación en una ley nacional, por un acuerdo entre la Nación y las provincias.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Hernández Ramírez.

Sr. Hernández Ramírez. — Difícil resulta para mí hacer uso de la palabra como integrante de la Unión Cívica Radical del Pueblo después de los medulosos discursos de los señores diputados, doctores Marini, Suárez, Sammartino y Adrogué.

Pero se me ocurre que algo puedo aportar después de haber escuchado las opiniones vertidas en el recinto por los representantes de los distintos sectores políticos. Me parece que la voracidad impositiva e irresistible de los Estados con economía deficitaria puede ser comparada sencillamente al hambre que como signo o síntoma padecen los seres que sufren una diabetes incontrolada. La ciencia médica ha conseguido el remedio para corregir toda la sintomatología de la diabetes y salvar, como lo ha hecho gracias al extraordinario descubrimiento de aquellos sabios canadienses, muchísimos centenares de miles de vidas humanas. En cuanto a la solución de esta voracidad, del hambre impositiva que padecen los Estados con economía deficitaria, no se ha logrado hasta el día de hoy, que yo sepa, no obstante las fórmulas dadas por tantos economistas en nuestro país. ¿No sería posible que alguna entidad concediese un premio, a la manera del premio Nobel, a quien diera la fórmula capaz de resolver en un país rico como el nuestro este desgraciado mal de la voracidad impositiva de los gobiernos?

Desde que llegó al poder, el jefe del Poder Ejecutivo ha anunciado que a breve plazo —si dos años es plazo breve en un gobierno de seis— se alcanzaría la solución de estos problemas. Diversos ministros de Economía han reiterado en distintas oportunidades que con un poco más de esfuerzo y sacrificio por parte del pueblo argentino el problema de nuestra angustia económico-financiera estaría resuelto. Y algún optimista ministro de Economía estableció el breve lapso de un invierno, que todavía se prolonga sin que el pueblo pueda quitarse de encima las ropas de abrigo.

En este debate, por un lado, se han dado cifras optimistas sobre la recuperación del poder de enriquecimiento del país, y por otro se han puesto en evidencia las dificultades que todavía tenemos, y que probablemente vamos a seguir teniendo, quizá por mucho tiempo más, para superar esta economía deficitaria y esta necesidad de seguir gravando con impuestos la actividad del pueblo, inhibiéndolo en su entusiasmo y en su deseo de trabajar y de producir más y mejor.

La voracidad impositiva ha afectado a todas las ramas de la actividad de nuestro pueblo, pero es evidente que quienes más la han padecido son aquellos hombres y aquellas empresas de poco o mediano capital que están en el intento de acrecentarlo y no lo logran porque en cuanto existe la posibilidad de un rédito interesante para llegar a concretar su sueño, viene el impuesto correspondiente a reducir sus ganancias, colocándolas en una situación de desánimo y de descorazonamiento para continuar la lucha.

Ya se trate de entidades de la industria o de la explotación de la tierra, ya de instituciones del Sur del país, del Norte, de la zona junto a los Andes, del centro o de las regiones próximas a los grandes ríos del Este, todas padecen de dificultades que les impiden llegar a nivelar su situación económica y financiera.

Representantes del bloque de la mayoría han dicho que el país se halla en un proceso de recuperación y que ha alcanzado índices que deben movernos a satisfacción y optimismo. Frente a esta tesis yo quiero recordar las palabras que en noviembre de 1961 pronunció una persona conocedora de la situación económica del país y de sus posibilidades como productor y exportador. El diario «La Nación», en su artículo de fondo aparecido en la edición del 17 de noviembre de 1961, al comentar la exposición mencionada, dice que esa tendencia decreciente y constante de nuestra producción, carcomida por una estructura de costos altamente inadecuada y sólo calificable de fantástica, ha llegado a asumir proporciones tales que ha podido decirse recientemente: «De no ser contenida esa tendencia decreciente, la República Argentina dejará de ser, hasta 1970, una nación exportadora de cereales y carnes para transformarse en importadora de esos productos.» Y continúa diciendo el editorial del diario «La Nación»: «¿Es eso un comentario superficial o una agorería baladí? No, desgraciadamente. Son palabras muy meditadas y fundadas, pronunciadas ante el ministro de Economía, los secretarios de Comercio y de Industria y Minería y otros funcionarios superiores por el presidente de la Cámara de Exportadores, en el banquete con que todos los años se celebra el 6 de noviembre como «Día de la Exportación».

A continuación, el editorialista agrega: «Para introducirnos en el ámbito ideal de la inquietante perspectiva enunciada bastará recordar que no hace todavía diez años —bajo el régimen depuesto— debimos realizar ya, en este país, que otrora se llamó con justicia “granero del mundo”, consistentes importaciones de trigo, harina y aceite. Fueron días de pan negro y también días sin carne: dos por semana. ¿Las causas? El desaliento llevado al productor agropecuario por un régimen cambiario que succionaba todas sus riquezas para costear una industrialización forzada, y, a la vez, los desvaríos de un gobier-

no despilfarrador y demagógico, la descapitalización producida por un sistema absurdo, la destrucción sistemática de los transportes y la mendaz detracción de la noble actividad campesina.

»Los recientes conceptos del presidente de la Cámara de Exportadores —dice “La Nación”— nos colocan ante la realidad efectiva de hoy (17 de noviembre de 1961, pocos días ha prácticamente), tan cercana al fantasma que acabamos de evocar. No hemos vuelto a importar trigo, pero hemos dejado de tener capacidad para abastecer a nuestro más inmediato y constante cliente: el Brasil.» Y yo agregaría, por mi parte, que he leído, no sé si ayer, que en nuestros silos, vacíos desde hace mucho tiempo, están almacenados los cereales que los Estados Unidos —trigo en este caso— venden a la república hermana del Paraguay, a la espera de su transporte.

»No se ha prohibido nuevamente el consumo de carne los jueves y viernes, pero no alcanzamos a exportar este año ni la mitad de lo enviado el anterior a Gran Bretaña, comprador que ninguna cortapisa pone a nuestras carnes. Y ello es así porque, como muy bien lo ha señalado el señor Borgonovo, “mientras el 95 por ciento de nuestras ventas al extranjero está conformado por productos de la agricultura y la ganadería, éstos integran sólo el 25 por ciento del producto bruto nacional”.

»Ciertamente —dice más adelante el articulista— los frutos del agro han constituido siempre la casi totalidad de nuestras exportaciones, pese a los halagadores envíos industriales de tornos a Italia, acoplados a Chile y Paraguay, heladeras y máquinas de amasar pan al Uruguay y Paraguay, últimamente nafta e hidrocarburos a la vecina orilla, e históricamente los lienzos, sobrecamas, frazadas, sombreros, etcétera, del obispo Victoria al Brasil, el 2 de septiembre de 1587. Y, sin embargo, la gravitación del agro en el producto bruto nacional nunca había llegado a reducirse como ahora al 25 por ciento, debido a la descapitalización iniciada en la década del 30 e intensificada catastróficamente durante el gobierno depuesto, cuando a partir del 37, 38 y 39 parecía querer levantarse de nuevo.

»Hemos recapitulado al comienzo las trabas opuestas al agro en aquellos quince años durante los cuales el chacarero no podía contar —por antinaturales decretos— con la ayuda de sus propios hijos ni transportar sus cosechas sobre rodados propios.»

Dejando algunos párrafos sin leer, voy a mencionar la parte que dice que en cuanto al transporte de la cosecha «seguimos asistiendo, especialmente en Santa Fe y también en el Norte de Buenos Aires y Sudeste de Córdoba, a muchas supervivencias del pasado y funesto monopolio».

«Pero fundamentalmente subsiste el régimen diferencial de cambios a través de retenciones y recargos que extraen del campo más de la mitad de los recursos para un presupuesto excesivo.»

En muchas oportunidades en estos cuatro años pasados el radicalismo del pueblo ha insistido en la necesidad de ayudar a recuperar nuestra más importante riqueza, la que nos viene del campo, suprimiendo dentro de lo posible o reduciendo a los términos indispensables las múltiples gabelas, directas o indirectas, que sobre el productor del campo están actuando y demostrando con cifras oficiales su capacidad para crear, su entusiasmo para trabajar, su espíritu para enfrentar las adversidades que el campo en muchas partes de nuestra república frecuentemente opone al que quiere sacar con su esfuerzo las riquezas que él le puede ofrecer. Sin embargo, por la vía del precio de las maquinarias, que con el pretexto de la protección de la industria nacional se las hace pagar cuatro o cinco veces más de lo que podrían costar en el extranjero, por la vía del apoyo a determinados sectores industriales, que evidentemente significan ocupación para múltiples trabajadores y su familia, se va acentuando la despoblación del campo argentino, que viene produciéndose progresivamente desde muchos años atrás, en directa relación con el desmedido apoyo que, por vía de planes de gobierno y de recuperación económica nacional, se está dando a industrias, que son necesarias para el país y que es conveniente que se desarrollen, pero siempre en un ritmo paralelo y no divergente con el desarrollo del campo, que sigue y seguirá siendo la fuente más importante de nuestra riqueza. Es así cómo el campo se ha despoblado y cómo continúa despoblándose, fenómeno que ocurre en muchas partes del mundo.

La verdad es que la vocación de ir a cultivar el campo decrece con los impuestos que directa o indirectamente pesan sobre los que trabajan en él, y hacen que el hombre se sienta atraído en gran proporción por esa luz deslumbradora de la industria, que lo acerca a los grandes centros, donde tiene distracciones espirituales y posibilidades de cultura que no tiene en otras zonas del país, porque no se ha entendido que también ha llegado la hora de sembrar universidades a lo largo y a lo ancho de la República, como sembró escuelas el gran Sarmiento. El que quiere darle una cultura a su hijo, el que quiere hacerlo instruir en las artes, en las ciencias o en las técnicas de la industria, va perdiendo la posibilidad de su contacto con él mientras se afana en cultivar la tierra y producir en ella para bien de todos. Nos encontramos así con que un 25 por ciento de la población argentina está en el campo o en poblaciones menores de diez mil habitantes, mientras que el 75 por ciento se encuentra alrededor de los grandes centros poblados de la Repúbli-

ca, contribuyendo a afirmar, por la experiencia nefasta que deja desde el punto de vista económico, aquel presentimiento del gran Alem, cuando se oponía a todo trance a que se hiciese capital de la República a la ciudad de Buenos Aires.

La Nación Argentina tiene un gravísimo problema —que deseo enunciar brevemente—, revelado por el cómputo de la tasa demográfica estudiada por la Oficina Internacional del Trabajo y por la UNESCO para un lapso de veinte años. Es bueno que conozcamos las cifras que tengo sobre mi banca, extraídas de un recorte de «La Nación» que tuvo la gentileza de facilitarme el señor diputado por Mendoza, doctor Aguinaga, cuando días pasados comentábamos un proyecto de ley que presenté a esta Cámara referente a la ayuda de los matrimonios prolficos, proyecto que no tuvo posibilidad de ser tratado en comisión y mucho menos en el recinto de la Cámara. Según las cifras de ese estudio, realizado en abril de 1961, va a ocurrir en América un serio fenómeno demográfico. Ello tiene una íntima relación con el tema que se está tratando, según mi manera personal de interpretarlo, porque o nosotros tenemos brazos para poner sobre la superficie la inmensa riqueza que Dios ha vertido sobre nuestra patria, o nosotros, a pesar de la mecanización y de la industrialización que se pueda lograr en la República, no podremos resolver el problema de nuestra liberación económica.

Según los gráficos del estudio a que me he referido, preparado sobre la base de cifras, de índices y de respectivas progresiones, en América del Norte el promedio anual de la tasa de crecimiento de la población, en el período 1950/1960, fue de 1,6 y para el período 1960/1975 posiblemente será de 1,5.

Para los mismos períodos, y para América latina, el informe consigna los promedios de 2,3 y 2,8 los que indican que el crecimiento demográfico es mucho más elevado en esta parte del continente. El proyecto principal de la UNESCO para el desarrollo de la educación en América latina contempla la gravedad de un cuadro en el que se indica un promedio del 40 por ciento de analfabetos mayores de quince años. Esto significa que las cifras dadas por organismos competentes y responsables nos presentan la gran tragedia de América, que nos hace llamar países subdesarrollados, expresión deprimente para el espíritu patriótico de cualquiera de los hijos de las repúblicas latinoamericanas. La gran tragedia es el problema de la cultura.

En el presupuesto de la educación, en nuestras repúblicas, salvo contadas excepciones, se asignan porcentajes mínimos en relación con lo que se invierte en otras partidas, para otros fines. Resolver el problema de la cultura y el de la salud pública es obligación anterior al problema de la economía y de las finanzas. Estos dos últimos serán materia seguramente

fácil de encarar el día que hayamos podido solucionar los dos primeros.

El artículo publicado en «La Nación» el martes 9 de enero del año en curso dice que dicho crecimiento excede el ritmo de la producción y que los gastos de educación son bajos comparados con los de otros países. Resulta entonces fácil advertir la magnitud del esfuerzo que será necesario emprender para mejorar los índices. Todo ello lo expreso para insistir ante los hombres que tienen la responsabilidad de dictar y aplicar las leyes en nuestro país. El problema de la educación y de la cultura, junto con el problema de la salud pública, requieren la mayor cantidad de recursos basados en una aplicación adecuada de los impuestos y de las otras fuentes de recursos con que cuenta el país para atender esas dos principales necesidades y para resolver nuestras dificultades en esta materia.

Daré algunas cifras, y pido a la Honorable Cámara que escuche con atención, porque de ello tiene que surgir una conclusión muy grave respecto al problema de la República Argentina frente al desarrollo demográfico que por estos estudios se calcula para el resto de las naciones americanas.

Algunos de los aspectos del cuadro —dice «La Nación»— que se reproduce a continuación contienen las cifras de los últimos censos y las estimaciones para 1970 y 1980, es decir, para un período de 20 años, como dije al comienzo de mi exposición. Ellas están expresadas en miles de habitantes, pero yo las daré en millones.

Canadá, según el último censo, 17.600.000 habitantes; cálculo para 1970, 22.100.000; cálculo para 1980, 27.500.000. Estados Unidos de América: 179, 208 y 245 millones, respectivamente. México 33, 41 y 53 millones. Argentina: 20.614.000; 22.397.000 y 26.200.000. Brasil: 64.900.000, 83.719.000 y 105.527.000. Chile: con una población de 7.600.000 en 1960 se le calcula una población de 10.400.000 para el año 1980. Colombia, de 13.800.000 habitantes que poseía en 1960, se calcula que tendrá 27.000.000 de habitantes en 1980. Vale decir que nuestro desarrollo demográfico es el menor de todos.

No pretendo ser un técnico en esta materia, pero invito a los señores diputados a que analicemos con sinceridad y franqueza estas cifras. Nuestro país que necesita tanto poblarse para resolver sus problemas; en el cual no hay inconvenientes de superpoblación ni los habrá en muchos años, pues sus riquezas potenciales le permitirían absorber con ventaja una población de 100 millones de habitantes, conforme con estas perspectivas de desarrollo demográfico no podrá contar dentro de veinte años más que con una población de 26 millones. ¿Qué ocurrirá entonces con un país como el nuestro, que se desarrolla industrialmente de una ma-

nera expansiva y explosiva dominando el desarrollo de la industria madre que provee el 95 por ciento de sus divisas? ¿Cómo vamos a explotar nuestros campos, nuestras minas, nuestras industrias, si no tenemos brazos, si inclusive la mecanización hará que muchos brazos no sean necesarios pero nunca en la proporción correspondiente?

Nuestro progreso exige que lleguemos a contar con 50 ó 100 millones de habitantes con un standard de vida semejante al que tienen pueblos con leyes sabias, de protección al desvalido, en donde no hay ranchos ni analfabetismo —en nuestros países debemos soportar todavía un promedio de un 40 por ciento de analfabetos en la población de hasta 15 años de edad—. ¿Qué sucederá con todas nuestras inversiones, con nuestros planes de recuperación económica si no ayudamos, si no protegemos al hogar argentino para que sea prolífico y si no hacemos posible que continúen afluyendo a nuestro país, como en otras épocas, corrientes de trabajadores que quieran vivir en ella bajo la protección de sus leyes y la feracidad de sus campos? ¿Qué va a pasar si seguimos con vecinos que se duplican o más en su población en el mismo lapso en que nosotros sobre 20 millones de habitantes, al ritmo actual, vamos a llegar a 26 millones?

Me dirijo a los hombres que tienen la posibilidad de gobierno en la rama ejecutiva, pidiéndoles que traten no de poner más trabas, sino de eliminarlas, como se hizo, por simple decreto, a empresas riquísimas, poderosas en dinero y en maquinarias, al liberarlas del impuesto a las ventas, pero no a actividades de bien público.

Ciento de millones de pesos se dilapidan por errores administrativos que no se quieren corregir, no obstante haberse denunciado por nosotros muchos de ellos en el seno de este cuerpo. No hemos tenido el eco necesario en este Parlamento para revisar contratos ruinosos para la República, contratos que, corregidos, darían mucho dinero para resolver la situación de reparticiones mal administradas y de aquellos otras que realizan obras fundamentales para el país, pero que no se llevan a cabo por falta de fondos.

A esos hombres que tienen la responsabilidad del gobierno yo los exhorto para que realicen las cosas que estamos especificando ahora brevemente y que puntualizaremos como corresponde en la discusión en particular.

Hay una actividad en nuestro país que fue declarada de gestión patriótica, y que iniciaran hombres civiles. Esa actividad llevó en mi vida más de treinta años de dedicación personal. Me refiero a la aeronáutica, nacida del esfuerzo y el entusiasmo de algunos pocos hombres. El Aero Club Argentino tuvo por primer presidente a Aarón de Anchorena en su primera comisión directiva, que fue la promotora y gestora de todo lo que constituyó en su hora inicial la pujante aviación militar y naval, a cuyos éxitos

agrego mi homenaje emocionado, como hombre que practica esa actividad como deporte, a los hombres de las alas de la patria que han ido más allá de nuestras primeras bases del continente antártico para refirmar la soberanía argentina en el propio polo Sur, utilizando materiales anticuados y haciendo una demostración de coraje y de pericia digna del mayor elogio.

No olvidemos que ese hecho, que todos hemos aplaudido, que trasunta la conquista por nuestra parte del casquete que nos corresponde en el cono polar Sur, fue posible porque los hombres civiles le dieron empuje a la aviación militar y naval argentina. Ese empuje logró la creación de la primera escuela de aeronáutica militar, a la que se suministraron instructores, globos y aeroplanos, merced a una colecta nacional iniciada por ellos.

Pero la voracidad impositiva —a este tema llego después de un rodeo quizá un poco extenso— está paralizando la acción de los promotores, de los precursores civiles de la aeronáutica nacional, imponiéndoles un recargo impositivo, incluso después de haber importado aviones destinados a la instrucción de nuestros pilotos civiles, que son la reserva de la Nación. Es una inversión que el país no hace con fines exclusivamente deportivos, porque en ello también juega la posible defensa de nuestra soberanía nacional y la eficiencia de nuestros comandantes de aeronaves comerciales. Pero los aeroclubes soportan gabelas impositivas retroactivas que les obligarían a cerrar sus dependencias, sus aeródromos. Y esto porque tienen que pagar un recargo que es prohibitivo para estas pobres instituciones que cuentan con muy poca ayuda económica oficial para la adquisición de sus máquinas.

Ruego a los señores diputados que me perdonen por esta disquisición que quizás haya robado algunos minutos a la Honorable Cámara, pero solicito al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y al señor secretario de Hacienda que contemplen la posibilidad de suprimir esas gabelas que pesan sobre la aeronáutica civil deportiva. Nadie puede desconocer los antecedentes que tiene esta actividad, y en el seno de la Cámara podríamos haber realizado el debate que llevara a la sanción de una ley que diera a los precursores y propulsores de la aviación civil la satisfacción de verse reconocidos como tales después de largos años de espera. No debemos olvidar que ellos fueron los que trazaron los primeros rumbos en los dilatados cielos de nuestra patria.

También me agradecería que el señor secretario de Hacienda o el señor presidente de la Comisión de Presupuesto me aclararan el alcance de un decreto cuya trascendencia económica no conozco. Desearía saber en forma aproximada la disminución que se produce en el Tesoro con la aplicación de este decreto número 2.049, del 16 de marzo de 1961, que lleva

la firma del señor presidente de la Nación, del ex ministro de Economía Alsogaray y del ex secretario de Hacienda Lequerica.

El texto del decreto establece: «Considerando: que la industria cervecera de nuestro país se encuentra frente a problemas de diversa índole, como consecuencia de la reactiva general que se observa en el consumo de esa bebida por parte de la población; que tal disminución en el consumo responde, principalmente, a los elevados precios de venta de la cerveza, sobre cuyo costo inciden significativamente los impuestos que gravan a dicho producto; que para lograr la estabilización económico-financiera de las empresas productoras sería menester obtener una inmediata reducción de los precios de venta al público para favorecer un razonable incremento del volumen de ventas, permitiendo así una adecuada absorción de los gastos de producción; que el abaratamiento de este producto podría lograrse mediante la supresión del impuesto a las ventas, ya que la Cámara de la Industria Cervecera Argentina se compromete, por intermedio de las otras cámaras gremiales, a hacer lo necesario para que la suma equivalente al gravamen suprimido se reduzca del precio de venta, para que el beneficio se traslade efectivamente al consumidor; que tratándose de una bebida tradicionalmente popular, que, por otra parte, también se encuentra gravada por la ley de impuestos internos, resulta razonable adoptar el criterio señalado en el párrafo anterior; por ello, en uso de las atribuciones que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 12 de la ley número 12.143 (texto ordenado en 1960), el presidente de la Nación Argentina decreta:

»Artículo 1º — Déjase en suspenso, a partir del 1º de abril de 1961, la aplicación del impuesto a las ventas a las operaciones de venta de cerveza en el mercado interno.

»Artículos 2º y 3º — De forma.»

Señor presidente: tengo en mi poder un informe muy sucinto de una de las empresas embotelladoras de bebidas sin alcohol, que ha pagado, en el año 1961, la suma de 33.591.960 pesos en concepto de impuesto a las ventas. Si a ello sumamos el derecho de inspección sanitaria bromatológica, el impuesto a las actividades lucrativas y otros, nos encontramos con un total cercano a los cincuenta millones de pesos. Pero ateniéndonos a la cifra del impuesto a las ventas de una sola planta embotelladora de bebidas sin alcohol, pregunto ¿cuál será la cifra que deja de percibir el Estado, no obstante su voracidad fiscal, por vía de la supresión del impuesto a las ventas para todas las empresas de la industria cervecera?

— Tal vez el premio Nobel a que me referí al comienzo lo merecería este decreto que aparece aquí resolviendo un problema impositivo de una manera tan sencilla. La cifra que reclamo

nos podría informar acerca de la magnitud en que podríamos incrementar los presupuestos de Educación y de Salud Pública —me limito a estos dos, sin referirme a otros— si se estableciese por lo menos una situación de paridad con las bebidas sin alcohol, actualmente gravadas con el ocho por ciento, y a las que ahora se las quiere gravar en otros dos puntos.

¿Cómo es posible aceptar los considerandos del decreto que acabo de leer, referido a la industria de la cerveza, mientras se impide que otras industrias se beneficien a través de sucesivas desgravaciones impositivas, ya sea en concepto de gravámenes de publicidad, de patentes, de vehículos, de inspecciones varias, de aprendizaje, de réditos, de beneficios extraordinarios, del sustitutivo a la herencia, etcétera, que en conjunto representan sumas muy superiores, por cierto, a las que perciben como retribución los empleados y obreros, y aun al dividendo de los accionistas que han aportado el capital?

Las palabras del señor diputado Adrogué han sido clarísimas en este sentido, de la misma manera que las pronunciadas en la sesión anterior por el señor diputado Ferreira.

Yo no pido una situación preferente para estas empresas que, a su vez, dan lugar a múltiples actividades de otro orden, en los campos de la metalurgia, de la química, de la pintura, de la litografía, de los automotores, del azúcar —por las fabulosas cantidades que para la preparación de las bebidas sin alcohol se requieren, problema relacionado, en este caso, con la tremenda situación de la provincia de Tucumán, siempre de actualidad—, pero no creo que sea equitativo aumentar del ocho al diez por ciento el impuesto a las ventas de bebidas sin alcohol, que son el lujo de la gente humilde.

No pido que se suprima el ocho por ciento; pero sí pido que a estas industrias se las coloque por lo menos en situación igualitaria a las que tienen en sus manos una gran riqueza del país, o a otras que ya son efectivamente ricas porque han progresado en forma plausible y meritoria.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Obras Públicas, ingeniero Isaac Breyer.

Sr. Hernández Ramírez. — Soy lector frecuente de un autor que todos nosotros conocemos, admiramos, y que contribuyó mucho para el actual orden jurídico de la República. Este autor, en el último capítulo de uno de sus libros, dice palabras que, con el permiso de la Presidencia y para terminar mi exposición, voy a leer. Ese autor fue un apasionado amigo de la paz y, naturalmente, intentó dar a su país y al mundo una fórmula que hiciera posible conseguir la paz. El libro a que me refiero tiene bastantes años de escrito; pero, como otros de este autor, de la misma época, está todavía imperando en la República.

«¿Queréis —dice este gran argentino— la paz entre las naciones hasta hacer de ella una necesidad de vida o muerte? Dejad que las naciones dependan unas de otras para su subsistencia, comodidad y grandeza. ¿Por qué medio? Por el de una libertad completa dejada al comercio o cambio de sus productos y ventajas respectivas. La paz internacional, de ese modo, será para ellas el pan, el vestido, el bienestar, el alimento y el aire de cada día. Esa dependencia mutua y recíproca para el noble vínculo de los intereses, que deja intacta la soberanía de cada una, no solamente aleja la guerra, que es destructora para todos, sino que también hace de todas las naciones una especie de nación universal, unificando y consolidando sus intereses, y facilita por este medio la institución de un poder internacional destinado a reemplazar el triste recurso de la defensa propia en el juicio y decisión de los conflictos internacionales, recurso que en vez de suplir a la justicia se acerca y confunde a menudo con el crimen.»

Estas palabras iniciales ya nos permiten reconocer al gran Juan Bautista Alberdi en su libro *El crimen de la guerra*.

«¿Creéis que haya inconveniente —agrega— en que una nación dependa de otra para la satisfacción de las necesidades de su vida civilizada? ¿Por qué razón? Porque en caso de guerra y de incomunicación cada país debe poder encontrar en su seno todo lo que necesita. Es hacer de la hipótesis de una eventualidad de barbarie, cada día más rara, una especie de ley natural permanente del hombre civilizado.»

Vivimos en un mundo convulsionado a la espera de una posible guerra. La verdad es que, gracias a Dios, parecería que ante el temor de la horrenda guerra nuclear, que haría desaparecer el género humano de la faz de la Tierra en pocos instantes, esa posibilidad es cada vez más remota. Por eso me parece siempre actual el pensamiento del gran tucumano.

«La industria de una nación que pide al gobierno protección contra la industria de otra nación que la utiliza por su mera superioridad, saca al gobierno de su función y da ella misma una prueba de su cobardía vergonzosa. El gobierno no ha sido instituido para el bien especial de éste o de aquél oficio, sino para el bien del Estado todo entero. El gobernante no es patrón y protector de los comerciantes, o de los marinos, o de los fabricantes; es el mero guardián de las leyes que protegen a todos por igual en el goce de su derecho a vivir barato, más precioso que el producir y vender caro.»

Señor presidente: termino mis palabras volviendo a invocar la ayuda al campo por la vía de la desgravación de los múltiples impuestos directos e indirectos que lo aherrajan y lo sofocan, impidiéndole desarrollarse y desempeñar su misión enriquecedora de toda la patria.

Solicito que en aquellas referencias particulares a este proyecto de ley se tengan también

en cuenta los argumentos que he expuesto, para que se dé por lo menos un trato igualitario a todas las empresas que, en condiciones semejantes, están desarrollando sus actividades con el apoyo de la población que consume sus productos, como es el caso de las bebidas, tanto de la cerveza como de las bebidas sin alcohol. Y ruego que Dios ilumine a estos hombres por este camino para que, a breve plazo, ese invierno que tanto se prolonga concluya con un presupuesto equilibrado que nos abra así ampliamente las puertas de un futuro promisorio y glorioso para la Nación Argentina. (*¡Muy bie! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Breyter). — Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

Sr. Conte. — Si me permite, señor secretario, desearía saber si va a estar presente durante la discusión en particular del proyecto. Como deseo referirme a la actuación del señor secretario en esta materia, si no asistiera a la discusión en particular desearía hacer uso de la palabra inmediatamente.

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado; voy a estar presente durante la discusión en particular.

Deseo fundar en la forma más breve posible este proyecto de ley impositiva sometido a la consideración del Honorable Congreso de la Nación.

En el propio mensaje del Poder Ejecutivo se establece que no se trata de una reforma de fondo, sino de medidas circunstanciales, necesarias para mejorar la percepción en algunos casos, y en otros dejando sin efecto disposiciones anacrónicas, tal como se establece en cuanto a sellos. Al así proceder, no es que el Poder Ejecutivo piense que no sea necesaria una reforma de fondo y una reestructuración total del sistema impositivo, sino que estima que la oportunidad no es la actual, por cuanto se están produciendo en el país transformaciones sustanciales en su estructura económica; de modo que si en este caso nos apresuráramos promoviendo reformas de fondo, en un plazo relativamente breve nos veríamos enfrentados con la necesidad de una nueva reforma.

Por otro lado, comparto la opinión de los que sostienen que el régimen legal impositivo gana mucho con la estabilidad. Según se recordara en la última reunión de esta Honorable Cámara, el rendimiento del sistema tributario tiene mucho que ver con la estabilidad de las leyes en vigor, y esto está también íntimamente vinculado con la tranquilidad del contribuyente. Cuando éste aprende a conocer las leyes de impuestos, paga con mucha más facilidad y con menor esfuerzo y tiene muchos menos problemas que cuando las leyes se reforman a menudo.

Quizás sería de aplicación para este caso aquella famosa polémica que se registrara entre dos grandes juriscóndulos con respecto a la codificación: Ihering y Savigny. En esa circunstan-

cia se enfrentaron, como es sabido, la escuela histórica y la llamada corriente iluminista. La escuela histórica sostuvo que había que esperar a que se produjera una suerte de decantación para recién entonces poder dictar las leyes que tuvieran la perfección y la estabilidad necesarias que se requieren. Triunfó entonces la corriente historicista, encabezada por Savigny.

Yo creo que en este caso de las leyes impositivas nos enfrentamos con un problema parecido y, repito que una reforma de fondo del sistema tributario debe realizarse en la oportunidad debida, que no está muy lejana.

Quiero destacar, por otro lado, que esta reforma no se hace para aumentar los tributos. Esta reforma no aumenta en absoluto la presión tributaria del sistema actual, y el mayor rendimiento que el Poder Ejecutivo espera lograr no se debe al aumento de las tasas o a la creación de nuevos gravámenes, sino a la mejor recaudación, ya que, por el contrario, muchos pequeños impuestos y tasas, como surge del proyecto, especialmente en materia de sellos, son suprimidos.

Por otra parte, mal podría afirmarse que el Poder Ejecutivo tuvo el propósito de aumentar la presión tributaria cuando ha sometido al Honorable Congreso la supresión de un impuesto como el de ganancias eventuales, supresión que la Honorable Cámara al parecer no comparte.

Sr. Marini. — Es que traía cola el asunto.

Sr. Secretario de Hacienda. — Paradójicamente quienes han acusado al Poder Ejecutivo de pretender aumentar la presión tributaria, se han alzado contra lo que era una desgravación.

Sr. Suárez. — No era una desgravación.

Sr. Secretario de Hacienda. — Entonces se justifica lo que afirmé el otro día, que muchos —no me refiero a los señores diputados— de los que han atacado esta supresión, simulando su preocupación por el hecho de que el fisco perdía recursos, en realidad atacaban esta reforma por la razón de que en alguna medida para cierto sector podía significar un pequeño recargo tributario.

Sr. Marini. — Era una razón de justicia tributaria.

Sr. Secretario de Hacienda. — Como además se ha hablado y veo a la Honorable Cámara inclinada por la desgravación de la cuarta categoría, quiero hacer algunas consideraciones al respecto.

Cuando se me consultó con relación a la desgravación de la cuarta categoría, siempre he afirmado que esta desgravación se imponía, pero debía hacerse —la misma respuesta he dado con respecto a las retenciones para ciertos productos— en el momento oportuno. No podía considerarse oportuno el momento actual, no sólo por razones fiscales sino por razones económicas.

Sin lugar a dudas en el país hay un excesivo poder de compra. No con respecto a un nivel ideal, sino de acuerdo con las posibilidades efectivas del país para poder suministrar los bienes de consumo correspondientes; por otra parte ese poder de compra está dado en función de la tasa de inversión. Sabido es que no se puede pretender consumir e invertir al mismo tiempo. Si se quiere realizar el esfuerzo de inversión que se necesita, en alguna medida se debe sacrificar el poder de compra. No se pueden obtener ambos efectos a la vez. Esta era la razón fundamental.

Cuando se habla de cuarta categoría todos pensamos en el empleado con relación de dependencia; pero quiero aclarar que también en ella están comprendidos los réditos provenientes de actividades tales como las que desempeñan los directores de sociedades anónimas, y de ninguna manera se podría realizar una desgravación total, puesto que sería fácil burlar el impuesto trasladando o pagando en concepto de retribución por trabajo personal lo que en este momento son simples dividendos. De modo que de ninguna manera se puede aceptar una desgravación total de esta categoría.

Sr. Conte. — ¡Qué poca confianza tiene el señor secretario en las entidades comerciales del país!

Sr. Secretario de Hacienda. — El problema de la evasión de los impuestos es uno de los más viejos del mundo, de modo que no podemos hacer simples afirmaciones en este aspecto, sino manejarnos con las realidades con que se manejan los países más adelantados, donde evidentemente este problema no ha sido superado.

Por otra parte, se ha hablado también —creo que lo ha dicho el señor diputado Sammartino— de que los recursos deben obtenerse gravando a los más pudientes. Evidentemente, ésta es una norma de justicia tributaria que se persigue y que se desea lograr; pero debemos reconocer que el gran actor de la historia es el pueblo y, lamentablemente, nos guste o no, al pueblo le corresponden los mayores esfuerzos porque son los más significativos y los únicos que pueden proporcionar una base de avance efectivo para resolver los problemas más importantes que tiene el país.

Como también ha habido referencias con respecto a los impuestos al consumo, particularmente al impuesto a las ventas, quiero hacer una aclaración. Hasta hace unos quince o veinte años se consideraba que un sistema impositivo basado fundamentalmente en impuestos al consumo era un sistema regresivo. Calificamos hoy, por el contrario, de progresistas a los impuestos basados fundamentalmente en la renta, puesto que ésta es una manera de tener en cuenta en forma más efectiva la capacidad contributiva del ciudadano.

Los últimos acontecimientos, particularmente las necesidades de la política de compensación

fiscal, que se ha efectuado con gran éxito en el mundo moderno para disminuir la intensidad de las depresiones económicas, han motivado que el impuesto a las ventas sea uno de los más utilizados, por cuanto es uno de los instrumentos más efectivos y poderosos para lograr una recuperación económica en el sentido deseado. La misma Gran Bretaña a partir de 1944, cuando tuvo que promover su política casi heroica de exportar o perecer, tuvo que apelar fundamentalmente a este tipo de impuesto para poder lograr su objetivo. De manera que no se puede afirmar en el mundo moderno que un sistema impositivo basado fundamentalmente en los impuestos al consumo sea un sistema regresivo. Téngase en cuenta que un país de tan alto desarrollo como Alemania Occidental tiene en estos momentos un sistema impositivo basado fundamentalmente en impuestos indirectos.

Sr. Adrogué. — ¿Me permite, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué. — A simple título de requerir una información formulo esta interrupción al señor secretario de Hacienda.

Tengo entendido que en el presupuesto de los Estados Unidos el 81 por ciento de la recaudación federal proviene del impuesto directo a los réditos.

Sr. Secretario de Hacienda. — Así es, señor diputado.

Sr. Adrogué. — El impuesto a las ventas también existe, pero en el orden estatal, porque lo aplican principalmente los Estados. Vale decir, que el argumento de que en los Estados Unidos la política general del país acusa un predominio del impuesto indirecto no sería exacto.

Sr. Secretario de Hacienda. — Yo he hecho esa afirmación con respecto a Alemania Occidental, y los datos están contenidos en una publicación del Banco de Boston.

Sr. Adrogué. — Me hago cargo del fenómeno de la repercusión y de la incidencia impositiva y reconozco que es un poco un espejismo creer que sólo los impuestos directos son los que gravan a las personas que inmediatamente los pagan, porque en éstos también hay incidencia y repercusión, y nadie emprende un negocio sin tener en cuenta lo que por sus réditos va a pagar. Al final, el pueblo soberano, como lo dijo el señor secretario, es el que sufre sobre sus espaldas las consecuencias. Sin embargo, como tendencia general, me parece que hay más justicia, aunque sea por los efectos psicológicos, en los impuestos directos y, en especial, en los impuestos a los réditos.

Sr. Secretario de Hacienda. — Veo que el señor diputado Adrogué, que es un distinguido jurista, también conoce bastante en materia tributaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en lo que respecta a la traslación de los impuestos. Este tema es un capítulo de la teoría

de la formación de los precios, y sin lugar a dudas en este aspecto siempre se tiene en cuenta el costo total, en el cual están incluidos también los impuestos directos, respecto de los cuales ingenuamente se ha pretendido decir que no se trasladan. Todos los impuestos se trasladan. En definitiva, las leyes de formación de los precios han de ser las que determinan la verdadera presión tributaria, y en esto no hay distinción entre impuestos directos e indirectos.

Comparto totalmente la opinión del señor diputado Adrogué en cuanto a la codificación.

Sr. Marini. — ¿Me permite una interrupción, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Marini. — Me parece que la nota fundamental de la distinción entre los impuestos directos e indirectos consiste en que a los primeros se puede aplicar el concepto de la progresividad, que es el modo más adecuado de hacer justicia tributaria.

Se refería el señor secretario recién al caso mencionado por el señor diputado Sammartino, a quien no tuve el honor de escuchar, de que quien más posee, más obligación tiene de pagar. Ese propósito y ese fin se consiguen a través de la progresividad, que no se puede dar en el caso de los impuestos indirectos, que casi siempre son proporcionales. La verdad es que también el traslado existe en el impuesto directo. Pero donde se produce invariablemente es en el caso de los impuestos indirectos, porque la percusión se opera sobre las cosas y de inmediato se traslada a los consumidores que soportan exclusivamente el tributo.

Sr. Secretario de Hacienda. — Esas afirmaciones no pueden hacerse con carácter absoluto, pero, en definitiva, en un lapso breve se van a traducir en el costo final y en el precio.

Con respecto a la codificación, quiero destacar que es un tema que ha preocupado a estudiosos, funcionarios y legisladores del país como también al gobierno. Es un tema muy debatido y todavía no se ven en forma evidente los resultados obtenidos por la codificación, si bien incompleta, efectuada en la provincia de Buenos Aires. En esta materia no se ve clara la ventaja que pudiera tener ella con respecto a una publicación ordenada de las leyes impositivas. Los textos ordenados, de una manera u otra, presentan casi todas las ventajas que brinda un código, sin tener la rigidez ni la estabilidad que deben ofrecer los códigos por definición. De todas maneras, yo no estoy en condiciones de pronunciarme al respecto, porque entiendo que todavía está abierto el debate.

El señor diputado Adrogué ha hecho mención a un tema importante al referirse a los medios de pago y a la cantidad de medios de pago. Sin lugar a dudas, el Parlamento es la más alta tribuna del país, y todo lo que se diga en él tiene especialísima repercusión. Yo, a riesgo de ex-

tender un poco esta exposición, quiero hacer dos reflexiones relacionadas con los medios de pago.

Se ha dicho que en proporción a la cantidad de medios de pago, con relación a hace diez años, la cantidad de moneda existente en el país es insuficiente. Es posible que sea así, pero existen aquí dos peticiones de principio: nadie dice, o no se ha establecido en forma incontrovertible, que los medios de pago deben mantener una proporción constante con los bienes de consumo. Más que de medios de pago, yo hablaría de cantidad de moneda. Hay un ejemplo que se ha hecho conocer muchas veces, diciendo que Gran Bretaña construyó todo su imperio con una cantidad de moneda proporcionalmente inferior a la de nuestro país. De manera que la cantidad de medios de pago no está necesariamente ligada con la cantidad y evolución de los bienes de consumo. La otra petición de principios consiste en considerar adecuada la relación de los medios de pagos con el producto bruto.

Durante la década anterior se ha producido una inflación galopante que no se quiere repetir. Parece más prudente contener los créditos y la moneda en un nivel determinado a fin de que los medios de pago se expandan de otra manera. Al decir medios de pago, me refiero a los papeles de comercio, al crédito, etcétera. El país debe buscar una estructura adecuada, que no lo conduzca a la inflación. No se desea la salida blanda constituida por el aumento de la cantidad de moneda en circulación.

Nosotros estamos en un error cuando se menciona la aplicación circunstancial de algunas teorías. El ministro de Economía del nazismo, señor Schacht, publicó un libro en cuyo título expone la teoría clásica al revés, al decir: «Más dinero, más capital, más trabajo», cuando lo tradicional siempre fue: más trabajo, más capital y más dinero. Recién como expresión de más capital existe más dinero. Sin embargo, en su país la teoría tradicional se aplicó al revés, dando resultado, no porque fabricando dinero se lograra mayor capital. Con los créditos tampoco se fabricaron capitales. Es que en Alemania la situación era distinta. Allí había capitales inactivos, y ésta es la razón y el secreto del éxito rotundo del ministro alemán. Había fábricas paradas a montones, equipos sin utilizar, más de cuatro millones de desocupados. Todo esto lo pudo poner en movimiento el ministro alemán mediante emisiones monetarias que, en este caso, equivalían a recursos crediticios. Sabido es que la moneda tiene mucho de común con el crédito, y a veces es difícil separarlos. Entonces, el ministro alemán, con una cantidad enorme de capitales inactivos que se encontraban entonces en su país, pudo, a través de recursos crediticios en alguna medida en la forma de moneda, ponerlos en movimiento y lograr el resultado que todos conocemos.

Quiero, por último, referirme a la delegación de facultades a que también hizo referencia el señor diputado Adrogué. El Poder Ejecutivo, por mi intermedio, recoge la expresión del señor diputado Adrogué, que, entiendo, todos compartimos, de defender la libertad y las instituciones. Pero a veces hay distintos modos de matar una institución y distintos modos de matar la libertad. A veces las instituciones se matan con un cumplimiento demasiado estricto o rígido. Es lo que algunos gremios han descubierto con el «trabajo a reglamento». Tanto es así que en materia aduanera no se podría cumplir rígidamente con las disposiciones existentes. Tampoco se pueden cumplir en los Estados Unidos donde su presidente tiene facultades especiales en esta materia, porque a veces está frente a maniobras de apoyo, de dumping, que pueden provocar daños enormes a la economía de un país, y no se puede esperar de ninguna manera la sanción de una disposición legal para la defensa necesaria. Las revoluciones tecnológicas traen a veces la necesidad de provocar ciertas modificaciones en las instituciones so pena de perecer. Yo me pregunto qué ocurriría con la disposición constitucional de Estados Unidos que obliga a convocar al Congreso para declarar una guerra, si tuviera noticias, como puede ocurrir ahora, de que en veinte minutos su país puede quedar destruido por la guerra. Evidentemente, nadie pensaría que el Poder Ejecutivo debe convocar al Congreso para poder tomar las medidas del caso.

Sr. Adrogué. — ¿Me permite una interrupción, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué. — Cuando me refería a la delegación que se hace con visos de inconstitucionalidad señalaba una situación real que, dentro de lo que yo conozco, no ocurre en los Estados Unidos en materia tributaria. En cuanto a la referencia a la guerra, evidentemente se trata de una situación de hecho totalmente diferente.

Sr. Secretario de Hacienda. — El principio jurídico es el mismo.

Sr. Adrogué. — Yo desearía que el señor secretario de Hacienda dijera si no está dentro de las facultades dadas por la ley al presidente de la República —que, a mi juicio, son objetables— la de dejar sin efecto los recargos, retenciones e impuesto a las ventas, rubros que representan 48 mil millones de pesos de los 120 mil millones previstos en el presupuesto. Yo diría que esto es excesivo.

Comprendo que el Poder Ejecutivo debe poder moverse dentro de ciertos límites. Ya en una cuestión lateral, digamos que la ley 14.780 permite al presidente de la República crear desigualdades de exención total de impuestos para una determinada categoría de inversiones, y podrá sostenerse que está bien o mal; pero yo creo que es función legislativa asumir la res-

pensabilidad de ese tipo de sanciones, conforme con lo establecido por el artículo 67, inciso 16, de la Constitución, y no dar una carta o una autorización en blanco, que es lo que se está haciendo actualmente por la legislación argentina, criterio que se aplica también, como añadí, en materia de racionalización administrativa cuando hemos dictado un presupuesto que prácticamente puede ser tomado de la cabeza o de los pies por el presidente de la República, lógicamente dentro de la ley en virtud de la autorización que le ha conferido el Congreso.

Creo que los constituyentes jamás pensaron en este tipo de autorización.

Sr. Secretario de Hacienda. — Quiero tranquilizar al señor diputado Adrogué al significarle que si el Poder Ejecutivo se decidiera, porque tiene facultades, a desprenderse de 48 mil millones de pesos, evidentemente no actuaría bien. Pero las limitaciones reales son muy importantes, tanto como las legales. Toda esta cuota de arbitrariedad, diría, de que puede disponer el Poder Ejecutivo, se ve muy limitada por las condiciones reales. Tanto es así que la historia demuestra que se ha hecho uso de esa facultad en proporción realmente razonable.

En otro sentido, se dijo lo mismo respecto de las leyes de coparticipación de impuestos. Se señaló que iban a ser un instrumento de sojuzgamiento de las provincias. Eso pudo haber ocurrido, pero la práctica demuestra lo contrario: las provincias han podido desempeñarse con mayor holgura y facilidad gracias a este sistema de recaudación centralizada.

Pudo haberse sostenido que esas leyes eran inconstitucionales. Lo afirman algunos autores, pero yo pienso que no es así.

Sr. Adrogué. — Sobre este tema, creo que todo el movimiento de coparticipación de los impuestos se mueve dentro de la Constitución Nacional. El que tal vez se está moviendo fuera de la Constitución Nacional es el gobierno federal, que desde el año 1932 está aplicando impuestos directos por tiempo determinado, colocándose al margen de lo constitucional.

Es bueno que recordemos esta circunstancia, porque alguna vez deberá reformarse la Constitución para incorporar en su texto alguna cláusula semejante a la enmienda XVI que dictaron en los Estados Unidos para que el impuesto a los réditos pudiera jugar como gravamen federal.

Por vía de acuerdos o tratados económicos a que las provincias están autorizadas por el artículo 108, con conocimiento o de conformidad con el gobierno federal, considero que las disposiciones relativas a los acuerdos de tipo económico interprovincial están implícitamente presuponiendo que pueden ser realizados...

Sr. Secretario de Hacienda. — Hay quienes sostienen que no pueden ser celebrados.

Sr. Adrogué. — Creo que hay dos situaciones diferentes: una guarda las formas constitucionales, salvo la referente al «tiempo determina-

do» que establece el artículo 67, inciso 20; la otra no guarda esas formas. Esta última podría concretarse en esta expresión: señor poder administrador: resuelva usted si debe cobrarse o no el impuesto a las ventas; resuelva usted si los derechos de exportación, con todas las implicaciones e inconvenientes que tienen en países de desarrollo, deben aplicarse o no.

Viene al caso señalar que todo el desarrollo de los Estados Unidos de América se hizo sobre la inexistencia de los derechos de exportación, pero nosotros, por la guerra con el Paraguay, nos vimos obligados a mantenerlos en la reforma constitucional de 1866. Es así como vivimos en un continuo gravar las exportaciones, poniendo los productos de la tierra en difíciles condiciones de competencia. Estos inconvenientes son producidos por las retenciones, que son verdaderos impuestos a la exportación.

Sr. Secretario de Hacienda. — No quisiera dejar sin replicar, aunque más no sea en dos palabras, lo dicho por el señor diputado Adrogué: en este momento, impuestos específicos a la exportación hay muy pocos.

De todas maneras, el sistema tributario, el sistema de costos internos, es el que en definitiva va a pesar sobre la exportación; de modo que todos los otros factores de costo van a influir en la misma forma. No se puede decir que esto sea solamente con respecto a un solo factor, como pueden ser los impuestos específicos a la exportación, que el Poder Ejecutivo tiene el propósito de eliminar en el tiempo más breve posible. Se han dado pasos significativos en tal sentido.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite una interrupción, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Una breve acotación a las palabras del señor diputado Adrogué.

Comprendo que la aplicación ortodoxa de los textos constitucionales nos llevaría a que el Parlamento tuviera que tratar todas y cada una de las disposiciones que en materia impositiva y presupuestaria demanda la administración nacional. Pero debo decir que desde el año 1853, fecha en que se dictó la Constitución Nacional, a nuestros tiempos, la situación económica y las fluctuaciones financieras han cobrado un ritmo dinámico tan extraordinario, que muchas de esas disposiciones, si las aplicáramos ortodoxamente, sin duda lo haríamos en detrimento de los grandes intereses nacionales.

Por ejemplo, si en el año 1959, cuando el gobierno dispuso la devaluación monetaria, se hubiera sometido el problema a la consideración y al examen exhaustivo del Parlamento, yo me pregunto qué hubiese ocurrido en el campo de la especulación económica y financiera si todos los sectores interesados estuvieran al tanto de la inminencia de la devaluación.

Sr. Marini. — Pero igual se hizo el negocio del trigo candeal.

Sr. Ferreira. — Ese asunto quedó perfectamente aclarado en esta Cámara. Lo que digo con respecto a la devaluación monetaria tiene aplicación cuando nos referimos a los recargos y retenciones. Además, deseo advertir que ya el gobierno de la Revolución Libertadora dictó los decretos leyes que este gobierno constitucional utilizó para amparar legalmente la institución de recargos y de retenciones.

Entonces yo no puedo menos que plantear la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría si esos sectores de la especulación tuvieran el tiempo necesario para saber que sobre determinadas actividades, transacciones o negocios se van a dictar medidas de orden monetario, cambiario, fiscales, etcétera.

Todo esto se relaciona con la adecuación de algunas disposiciones constitucionales que indudablemente reclaman ser revisadas en el futuro para adaptar la ley de las leyes a las necesidades y, sobre todo, a la realidad económico-financiera que vive el país después de casi ciento diez años de vigencia de aquélla.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Me permite una interrupción, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Hernández Ramírez. — En el curso de mi exposición formulé una pregunta que el señor secretario todavía no ha contestado. Probablemente no ha alcanzado a apreciar la importancia de la cuestión, que se relaciona con un problema que considero fundamental.

Desearía que el señor secretario me informe sobre la cantidad que deja de percibir el fisco por la supresión del impuesto a las ventas a la industria cervecera de la República. Anteriormente di una cifra relacionada con el pago efectuado por una planta embotelladora de bebidas sin alcohol, que ascendía a los 33 millones de pesos en el año 1961.

Sería entonces interesante conocer cuánto deja de percibir el fisco por la aplicación del decreto que exime del pago de impuesto a las ventas —que tiene una alícuota del 8 por ciento y que podrá ser del 10 si se aprueba el proyecto en discusión— a la industria cervecera.

Sr. Secretario de Hacienda. — En este momento no puedo suministrar los datos que me solicita el señor diputado, porque para ello debería tener las cifras de venta correspondientes a la industria cervecera. Sin embargo, esta industria paga impuestos internos y, por lo tanto, no está desgravada. Además de este impuesto, pagaba también el impuesto a las ventas, que al parecer había colocado a esta actividad en dificultades muy graves.

De todas maneras, no puedo expedirme, puesto que necesitaría las cifras a que he aludido.

Sr. Hernández Ramírez. — En mi exposición dije lo mismo que acaba de expresar el señor secretario. Es decir que pagaban además otros impuestos, y que incluso lo pagaban las empresas que fabrican bebidas sin alcohol.

Sr. Secretario de Hacienda. — Impuestos internos, no.

Sr. Hernández Ramírez. — Sí, señor secretario. He dado cifras incluso para la totalidad de esas empresas fraccionadoras. Son tantos los impuestos que pagan esas industrias, que suman más de lo que abonan en salarios y en dividendos.

Sr. Secretario de Hacienda. — Pero no impuestos internos; la cerveza, además, paga otros.

Sr. Hernández Ramírez. — El señor secretario me informa de algo que ya he dicho; pero lo que no puede informar es el monto de esa cifra, que considero muy elevada, porque la industria cervecera es de una gran capacidad económica.

Sr. Secretario de Hacienda. — Quiero aclarar que la cerveza tiene el mismo tratamiento que el vino. No obstante, la preocupación del señor diputado debe ser tenida en cuenta para un estudio al respecto.

Sr. Hernández Ramírez. — No quedo satisfecho con el informe que ha dado el señor secretario.

Sr. Secretario de Hacienda. — Es difícil satisfacer a todos.

Voy a terminar mi exposición dando cifras comparativas acerca de la presión tributaria en los Estados Unidos y la Argentina. Se ha afirmado que nuestras tasas, en algún caso, son superiores a las de los Estados Unidos. Eso es cierto; no obstante, la presión tributaria en los Estados Unidos es superior a la que registra nuestro país. Según cálculos que siempre son difíciles de hacer y que naturalmente deben ser revisados muy prolijamente, nuestra presión tributaria con respecto al producto bruto alcanzaría al 20,2 por ciento, mientras que en los Estados Unidos representa más del 24 por ciento, y en Canadá más del 23 por ciento. Ello se debe a una mayor eficiencia de los sistemas de percepción impositiva, que a pesar de tener tasas inferiores en algunos casos, dan lugar a una mayor presión tributaria.

Por eso nuestros esfuerzos se enderezan fundamentalmente a mejorar la recaudación; pero en ningún caso se podrá señalar que haya aumento de tasas o nuevos impuestos en proporciones significativas.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Giordano Echegoyen. — El señor secretario ha establecido una comparación entre los Estados Unidos y la Argentina que a mi juicio no puede hacerse, porque existe una diferencia substancial, desde el momento que en los Estados Unidos hay un standard de vida elevado y un valor adquisitivo de la moneda que guarda relación con el costo de la vida.

Sr. Secretario de Hacienda. — Evidentemente, lo que dice el señor diputado es cierto. Las

estadísticas hay que pensarlas mucho. Pero en este caso se trata de una comparación con respecto al producto bruto, de manera que de algún modo se tiene en cuenta el nivel de vida. Es claro que podría aducirse el principio de la desutilidad creciente de la riqueza, que hace que la misma proporción pueda afectar anímicamente de manera distinta.

Sr. Giordano Echegoyen. — El señor secretario ha traído el ejemplo del impuesto a las ventas, que no permite establecer comparaciones entre los Estados Unidos y nuestro país, porque existe aquí un proceso de inflación que impide satisfacer las necesidades más apremiantes. Si se añade a eso un impuesto a las ventas, resulta una presión tributaria sobre la parte de la población menos dotada económicamente y sobre los costos de los bienes de consumo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Prece.

Sr. Prece. — A efectos de ganar tiempo en este largo debate, que en particular también ha de insumir mucho, voy a seguir avanzando en el problema y me voy a referir a un tema que es de actualidad y a cuyo respecto hay mucha inquietud por conocerlo. Es la desgravación que sancionaremos para los réditos de la cuarta categoría.

Sr. Conte. — Si el señor diputado me permite, quiero aclarar que previamente deberá tratarse el proyecto que sobre esa cuestión he presentado hace tiempo y cuya consideración debe ser preferente.

Sr. Prece. — El señor diputado Conte hace ya mucho tiempo que plantea un problema de prioridad en esa iniciativa. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en reconocer la prioridad de las inquietudes del señor diputado; pero, evidentemente, no estamos aquí para salvar un prestigio personal o para establecer prioridades. Simplemente, la comisión ha propuesto, a través de un proyecto que obra en la Secretaría de la Honorable Cámara, las modificaciones que estima convenientes y posibles para este momento económico y financiero por que atraviesa el país, y sobre todo reparando en las condiciones en que el erario público puede soportar este tipo de desgravaciones.

Ha sido motivo de gran preocupación para todos los señores diputados e incluso para los miembros del Poder Ejecutivo poder aliviar las cargas impositivas generales, principalmente las que recaen sobre los sectores de menores ingresos. Esas inquietudes se han manifestado a través de diversos proyectos que obran en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también a través de serios estudios realizados en los organismos competentes, tales como la Dirección General Impositiva, la Secretaría de Hacienda y la propia Presidencia de la Nación.

Evidentemente, a todos nos angustia la situación del pueblo, especialmente la de los sectores del trabajo y los de menores ingresos. Pero estamos en la etapa de la reconstrucción y de

la capitalización del país. Necesitamos y deseamos estimular el ahorro. Todas estas circunstancias, unidas a las necesidades presupuestarias, hacen que los cambios en esta materia deban realizarse de una manera progresiva y compatible con las necesidades y las posibilidades del erario público. (*¡Muy bien!*)

Por estos motivos, la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a través del pensamiento de su mayoría y siguiendo la línea no interrumpida desde que esta mayoría maneja como tal las decisiones de esa comisión, ha hecho llegar a la mesa de la Honorable Cámara un proyecto por el que se modifican los artículos 20 y 21 de la ley 11.682.

Solicito que se dé lectura del texto de ese proyecto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (González). — El proyecto propone agregar como puntos 2º y 3º del artículo 2º del dictamen de la comisión, lo siguiente:

2º Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Las personas de existencia visible residentes en la República tendrán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, la suma de treinta y seis mil pesos (\$ 36.000) anuales

Dicho mínimo no imponible se elevará en doce mil pesos (\$ 12.000) anuales para los contribuyentes que tengan cargas de familia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 6º superiores a treinta y seis mil pesos (\$ 36.000) tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo de ciento veintiséis mil pesos (\$ 126.000) anuales.

3º Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a treinta y seis mil pesos (\$ 36.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

- a) Doce mil pesos (\$ 12.000) anuales por el cónyuge;
- b) Seis mil pesos (\$ 6.000) anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro menor de edad o incapacitado para el trabajo; por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta, bisnieta) e hijastra; por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo); por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo, y hermana cualquiera sea su edad; por el suegro o la suegra; y por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea su edad.

Cuando las cargas de familia a que se refiere el inciso b) de este artículo excedan de dos, se admitirá, para el total de esas cargas, una deducción adicional de mil doscientos pesos (\$ 1.200) anuales por cada una. Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes que tuvieran a su cargo más de tres hijos podrán deducir la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos (\$ 2.400) anuales por cada hijo que exceda de ese número.

La deducción por cargas de familia sólo podrán efectuarla el o los parientes más cercanos que tengan réditos impositivos.

Sr. Prece. — Como podrán apreciar los señores diputados a través de la lectura, estableciendo comparaciones con la legislación vigente podemos decir que, en virtud del artículo 20, la renta no imponible, que estaba establecida para todas las categorías en 24.000 pesos, se elevaría a 36.000. Los que además tengan cargas de familia, de 8.000 pesos se eleva la deducción adicional a 12.000 pesos. Los comprendidos en la cuarta categoría, de 96.000 pesos, se los lleva a 126.000. Por la desgravación del artículo 21, la deducción por cónyuge, que era de 8.000 pesos, se eleva a 12.000; por cada hijo, de 4.500 se eleva a 6.000, además de un adicional de 1.200 pesos en el caso de más de dos hijos. Lo mismo ocurre con el adicional por más de tres hijos.

De tal manera que en la legislación vigente está desgravada la suma de 145.000 pesos, y a través de este proyecto se desgravaría hasta la suma de 198.000.

Esta desgravación no sólo comprende a la cuarta categoría, sino que también se mejorarán las otras categorías de réditos, que de 49.000 pesos de renta exenta se eleva a 72.000. De esta manera un sueldo desgravado para una familia tipo, que actualmente es de 12.000 pesos, se elevaría a 16.000; vale decir, una familia compuesta por matrimonio y dos hijos tendría exento de impuesto hasta un sueldo de 16.000 pesos mensuales. Entendemos que si bien esta cifra no alcanza un ideal, evidentemente llena una importante necesidad, haciendo que un gran sector del pueblo esté totalmente desgravado del impuesto a los réditos.

Esta es la posición que sostiene la mayoría de la comisión, después de meditar mucho acerca de que algo había que hacer en este problema, aun sacrificando un poco más al erario público.

Por otra parte, estudios realizados e informaciones recogidas en la Dirección General Impositiva, con cuadros estadísticos, tomando como base la recaudación del año 1959, en un cuadro que se refiere a la clasificación por magnitud de renta sujeta a impuesto, se pueden establecer las siguientes conclusiones: que los contribuyentes que tienen una renta imponible de hasta treinta mil pesos anuales representan el 48 por ciento del total de casos analiza-

dos, y contribuyen con sólo el 6 por ciento de la recaudación. Los contribuyentes que tienen una renta imponible de hasta 300.000 pesos anuales representan el 47,9 por ciento de los casos y contribuyen con el 25,2 por ciento de la recaudación. Los contribuyentes que tienen una renta imponible de hasta 3 millones de pesos anuales representan el 3,5 por ciento de los casos y contribuyen con el 29,6 por ciento de la recaudación.

De esto se puede obtener la siguiente conclusión: en las pequeñas rentas impositivas está la mayor cantidad de casos, pero está también la menor recaudación. Por eso entendemos que la posición que sustenta la mayoría de la comisión no ha de ocasionar al erario público una disminución de la recaudación que no pueda ser soportada sin lesionar los ingentes gastos que tiene que afrontar la administración.

Consideramos que la posición sustentada por la comisión, que no nos cabe duda ha de ser compartida por la mayoría de la Cámara porque resuelve un problema fundamental, desgravando sueldos de hasta 16.000 pesos, es compatible con los intereses del erario público, y por eso solicito a la Cámara que apoye el proyecto de la mayoría de la comisión, que es viable y que resuelve un problema de muchos sectores de menor ingreso.

Este despacho contiene muy importantes desgravaciones, y es evidente que ellas han de incidir en el costo de la vida, porque se han desgravado una serie de artículos que integran el consumo popular. Por ejemplo, en el impuesto a los réditos, entre las excepciones que se han incorporado, figura la correspondiente a las utilidades provenientes de la venta de semilla de categoría original. La comisión tuvo en cuenta aquí un proyecto presentado por el señor diputado Pologna, muy bien fundamentado, e hizo suya la iniciativa.

En el año 1960 se produjo la exención para este tipo de semilla original, limitada a oleaginosos, forrajeras y arroz, y ahora se incorporan los cereales. De modo que los criaderos de semilla original tienen el estímulo de una exención impositiva, porque es evidente la importancia que ello tiene en cuanto al rendimiento de las cosechas, razón por la cual la política impositiva tiene que ser de estímulo. De este modo los criaderos, que están en su mayor parte en manos privadas, recibirán un estímulo para que el espíritu de investigación se mantenga a fin de que puedan ser mejoradas cada vez más las semillas que han de ir a nuestro campo. A través de la mejora de la calidad de la semilla el rendimiento de la cosecha de trigo, por ejemplo, se ha incrementado en un veinte por ciento. Es necesario destacar en esta materia la labor del ingeniero Klein, que ha sido en el país un pionero.

Sr. Adrogué. — Vinculado directamente con lo que acaba de exponer el señor diputado,

quiero expresar mi plena conformidad con la incorporación de esta modificación al inciso g). Como lo ha demostrado el señor presidente de la comisión, importa ampliar el alcance del inciso g), que se refería exclusivamente a un tipo de semilla, a todos los tipos de semillas, que es en definitiva lo que trasunta su redacción. En este sentido, lo considero muy loable, y adelanto mi conformidad con lo expresado en el dictamen de la comisión, que, por cierto, no figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo y que en este aspecto importa una mejora evidente.

Sr. Prece. — Con respecto al impuesto a las ventas hay también algunas desgravaciones muy importantes. Se ha incorporado, por ejemplo, un artículo que dice: «Agrégase al artículo 89, como inciso f), el siguiente: Los gastos directos de venta que incidan sobre las enajenaciones que los industriales efectúen al menudeo y al público consumidor, en la forma y condiciones que fije la reglamentación.» Había un tratamiento injusto entre los industriales que hacían llegar sus productos al público a través de intermediarios con relación a los que hacían la venta directamente. Quienes vendían directamente al público incorporaban al precio, a los efectos de tomar la base imponible, los gastos de comercialización. De acuerdo con este inciso, podrán desgravar los gastos de comercialización como forma de fomentar la venta directa del industrial al público, haciendo posible que le lleguen los productos con la menor cantidad posible de intermediarios, sobre todo adaptándose a los sistemas modernos de ventas, a través de los supermercados, que hacen posible la adquisición de artículos al menor costo posible elaborados directamente por el industrial.

También han sido desgravadas del impuesto a las ventas las maquinarias agrícolas, dándose a este renglón el mismo tratamiento que a los tractores. La industria dedicada a la fabricación de estas máquinas agrícolas, especialmente relacionada con el interior del país, necesitaba de este estímulo; y, además, el campo, que en este momento sufre dificultades por encarecimiento de los costos de producción y por inconvenientes de tipo crediticio, recibirá esta desgravación como fomento a su expansión.

Sr. Adrogué. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué. — El ánimo de estas pequeñas interrupciones tiende a obviar en la discusión en particular el uso de la palabra. Deseo apoyar calurosamente todo lo que importe una exención en un impuesto como éste, que, dentro de lo que habíamos hablado en términos generales, por referirse a impuestos indirectos, merece la desgravación que incida en forma que permita una real rebaja del costo de la maquinaria agrícola, aunque no creo que este gravamen sea tanto de fomento o de ayuda a la industria de la maquinaria agrícola, sobre la cual mucho tendríamos que hablar. Pero si tal vez se llegara a cumplir el pronóstico del señor

diputado Prece y se tradujera en alguna disminución del precio de venta a los agricultores de las máquinas que necesitan, debiéramos apoyar la rebaja. Ojalá también se cumpla la exención de los gastos directos de venta que inciden sobre los productos que los industriales venden al menudeo al público consumidor. Estimo loable las dos iniciativas.

Sr. Barreto. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Barreto. — ¿Podría informar el señor diputado en qué porcentaje aproximado se desgrava el costo de la maquinaria agrícola con la deducción impositiva que acaba de mencionar el señor diputado?

Sr. Prece. — La tasa del impuesto a las ventas es del 10 por ciento; pero, como se deduce la materia prima, la deducción real ha de ser un poco superior al 5 por ciento sobre el valor de la maquinaria agrícola.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Hernández Ramírez. — El inciso 2º del artículo 2º del proyecto dice: «Si se tratara de asesoramiento de carácter exclusivamente técnico industrial prestado a las explotaciones mineras, empresas de transportes, astilleros navales o industrias manufactureras o de transformación, se presumirá que el 50 por ciento de las sumas abonadas por tal concepto cubre gastos o costos del beneficiario del exterior...»

Yacimientos Carboníferos Fiscales tiene un contrato de asesoramiento para las minas de Río Turbio por un importe que alcanza al 6 por ciento sobre 42 millones de dólares posibles de prestación para la incrementación de la mina y, además, en concepto de gastos se reconoce la suma de 390.000 dólares. Deseo que el señor miembro informante me aclare si este contrato estaría incluido en los beneficios de la disposición que acabo de mencionar y, en consecuencia, correspondería deducir el 50 por ciento en materia de gastos sobre la totalidad del importe fijado para asesoramiento.

Sr. Prece. — El contrato puede tener especificaciones particulares; aquí se trata de disposiciones generales. El sentido de esta excepción incluida en el artículo 62 como agregado al inciso 1) se refiere exclusivamente al asesoramiento de carácter técnico industrial prestado desde el exterior.

Es evidente que hoy la industria, con motivo de la concentración de capitales, necesita un asesoramiento técnico específico.

Sr. Hernández Ramírez. — No es respuesta a mi pregunta.

Sr. Prece. — Con respecto a su pregunta, las condiciones de ese asesoramiento han de haber quedado establecidas en el contrato.

Sr. Hernández Ramírez. — La ley es superior al contrato y puede perfeccionarlo. En consecuencia, la empresa puede aplicar el beneficio

del 50 por ciento sobre su entrada global, cosa que podría prestarse a confusiones, como ocurrió con el contrato con Ciave Sofremines, y seguiríamos invirtiendo dinero en favor de intereses contrarios al país, como lo he demostrado en distintas oportunidades en este recinto.

Sr. Prece.— En cuanto a los impuestos internos, existen algunas desgravaciones también muy importantes que se refieren a artículos de consumo popular.

Se ha modificado el régimen de impuestos al tabaco. Este punto ha sido abordado en el informe en general del señor miembro informante de la comisión. Fue necesario modificar totalmente el régimen de impuestos internos al tabaco, porque, de acuerdo con los compromisos internacionales, el sistema vigente no era viable, porque no sólo se aplicaban impuestos por la calidad y peso de los artículos, sino por la procedencia de los tabacos, y se hacía una discriminación impositiva según que las mezclas estuvieran hechas con tabaco paraguayo, brasileño, etcétera. El dictamen significa racionalización y simplificación del impuesto, lo que ha sido bien recibido por los interesados, ya que, aunque significaba una incrementación del impuesto, su magnitud es de tan escasa importancia, que en cierta medida la racionalización favorece a la industria tabacalera.

Sr. Adrogué.— ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Prece.— Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué.— Sobre el punto al que acaba de referirse el señor diputado, yo diría que es un ejemplo típico de aquellos en que la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, para que por vía de reglamentación aplique el impuesto a los tabacos, es casi imprescindible.

Yo no critico la delegación de facultades, en cosas que si bien puede hacer el Poder Legislativo, porque está dentro de sus facultades, tiene inconvenientes de tipo práctico, porque la ley de impuestos internos en vigencia entra realmente en una minuciosidad tal —que si se trata de tantos gramos, de tanto peso, o de tal procedencia, como ha explicado el señor diputado Prece— que, en rigor de la verdad, el Poder Ejecutivo debe reglamentarla.

La ley no debe entrar en el detalle; no debe determinar si se trata de cigarros, cigarrillos o cigarritos, si deben tener tal o cual precio por caja. Esa, evidentemente, es materia de reglamentación del Poder Ejecutivo. Y en el proyecto se establece una verdadera delegación, que no he señalado en mi exposición porque se trata de aquellos puntos donde razonablemente debe actuar la delegación de facultades, ya que aquí son de aplicación disposiciones perfectamente claras.

Sr. Prece.— Siguiendo con mi exposición debo señalar que se desgravan de impuestos internos los tejidos hechos con fibras sintéticas.

El impuesto a que se refieren los artículos 107 y 108 de la ley de impuestos internos, se aplica

a los hilados y tejidos de seda, y fue creado para combatir el contrabando de tejido de seda y proteger, a la vez, la incipiente industria del rayón en 1957.

A través de la ley 13.648 dictada en 1949, se sustituyó el impuesto a los tejidos de seda o mezcla, por el impuesto interno a los hilados de seda, natural o artificial y fibras sintéticas y similares, que es lo que aquí se desgrava, mediante la modificación del impuesto a los hilados y tejidos de seda.

Los productos que alcanza esta ley de impuestos internos están desgravados en general con una generalidad tal, que el impuesto cubre todas las categorías correspondientes a cierto tipo de consumos. Pero en este caso hay una discriminación ya que están gravados hilados de seda natural o artificial y fibras sintéticas y similares, dejando fuera del gravamen los demás hilados, como algodón, lanas, y otras fibras sintéticas, creándose así algunas situaciones de desventaja con violación del principio de igualdad ya que ciertos productos se ven disminuidos en su capacidad de competencia.

Por otra parte, se trata de elementos destinados a la indumentaria y uso del hogar, y todo lo que tienda a reducir los precios en beneficio del consumidor debe propiciarse. A la vez permite, en cierta medida, el reequipamiento de la industria.

La desgravación hará que el consumo popular pueda sentir en cierta medida estos beneficios, porque estas fibras sintéticas podrán competir con fibras naturales. Se mantiene, en cambio, el impuesto a los tejidos e hilados de seda, de modo que se mantiene el sentido de un impuesto de tipo suntuario a la seda.

Sr. Adrogué.— Concretamente, la disposición que se reforma importa la desgravación de la seda artificial o fibra sintética y similares, y lo demás queda igual.

Sr. Prece.— Exactamente. Además, se modifica en cierta medida el artículo 66 que se refiere al impuesto interno a los seguros.

La actividad aseguradora debe tender a una mayor difusión geográfica de sus riesgos como una de las condiciones básicas para que pueda jugar la ley de la compensación. Es así como toda compañía de seguros en el curso de sus operaciones cubre riesgos de personas que se radican o domicilian en lugares muy separados.

Conspira contra la difusión del seguro el régimen fiscal vigente por la multiplicidad de los tributos que se aplican. El ejemplo más típico es el impuesto de sellos, que grava con doble o múltiple imposición la materia imponible, porque al tributo nacional se agregan los provinciales, ya que en este aspecto no se ha operado la unificación. Por ello, en el despacho se ha propuesto una solución que excluye del impuesto de sellos a las pólizas de seguro y se unifican en los impuestos internos.

El propósito de esta modificación es simplificar el procedimiento y no disminuir la recau-

dación fiscal, porque mientras se elimina el impuesto de sellos se aumenta la tasa del impuesto interno sobre las operaciones de seguros. Es así como en el despacho se elevan dichas tasas del 8 ½ por ciento al 10 por ciento para los seguros en general y del 2 ½ por ciento al 4 por ciento para los seguros sobre los riesgos personales.

Este aumento de las tasas compensaría la disminución de la recaudación del impuesto de sellos en jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Para aclarar mejor este problema, solicito la inserción de distintos cuadros donde están establecidos los montos de las recaudaciones, y se podrá observar que con esta modificación no ha de variar la recaudación (1). Tampoco habrá ninguna desgravación ya que se trata de una mera simplificación. Es decir, que se elimina el impuesto de sellos a las pólizas de seguro, para evitar la doble o triple imposición y, sobre todo, los distintos regímenes existentes por la actividad fiscal realizada por la Nación y las provincias. Además, esta actividad cae bajo la órbita de los impuestos internos, que sufren un incremento en su tasa para no modificar la recaudación.

Por otra parte esta unificación entrará en el régimen de la ley 14.390, lo cual hace indispensable la adhesión de todas las provincias para que tenga plena vigencia la modificación propuesta. En esta forma las provincias se verán favorecidas, porque no tendrán que realizar y controlar recaudaciones sobre las pólizas de seguro.

Sr. Adrogué. — Entonces, prácticamente la situación de las compañías aseguradoras desde el punto de vista impositivo será la misma.

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Se aumenta la tasa de los impuestos internos, haciendo coparticipar a las provincias, de tal manera que no se verán perjudicadas.

Sr. Adrogué. — Descarto, señor diputado, que esta sugestión debe venir abonada por algún informe de la Superintendencia de Seguros y pienso también que habrán sido escuchadas las entidades aseguradoras.

Sr. Prece. — Así es, señor diputado. Se trata de una necesidad cuya satisfacción se reclama desde hace mucho tiempo.

La modificación de los impuestos internos también comprende la incorporación a este régimen tributario de las bebidas gasificadas, temperamento que se adopta por primera vez.

Este es un tema ampliamente debatido y la comisión entiende que esta clase de bebidas pueden soportar un impuesto interno del 10 por ciento ya que los montos de venta de las empresas son extraordinarios.

Es cierto que hay discrepancias con respecto a este punto, sobre todo por los intereses, que aparecerían lesionados, de las provincias productoras de frutas cítricas que en cierta manera entran en la composición de algunas de estas bebidas. Pero no es menos cierto que la mayoría de estas bebidas tienen muy poco jugo de frutas, y en algunos casos nada. Se trata de bebidas gasificadas, carbonatadas, muchas de ellas artificiales, que si bien son objeto de consumo por la generalidad de la población, están en condiciones de soportar este gravamen. Sobre todo si se racionalizara en cierta medida la distribución y la intermediación, posiblemente los precios no serían modificados por este modesto impuesto, ya que el valor de estas bebidas en fábrica es muy reducido y un diez por ciento de dicho valor apenas significa unos pocos centavos sobre el precio con que llegan al consumo popular.

Por ello, la comisión entiende que este artículo que ha agregado al despacho puede merecer el apoyo de los señores diputados, y así lo solicita.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — He escuchado atentamente la exposición del señor presidente de la Comisión de Presupuesto con respecto al gravamen interno a las bebidas no alcohólicas que por primera vez —como él ha expresado— se incluye en la legislación impositiva argentina. No voy a reeditar el debate en general sobre este asunto, y me reservo para volver sobre el tema en la discusión en particular. Pero desde ya quiero solicitar que al hacerse referencia a estas bebidas se distinga entre aquellas que no tienen nada o sólo un mínimo de jugo de frutas en su composición y aquellas que tienen una parte sustancial de jugos de frutas.

Además, quiero también llamar la atención de los integrantes de la Comisión de Presupuesto en el sentido de que, así como para el caso del tabaco se toman en cuenta las disposiciones del GATT y del acuerdo sobre zona de libre comercio, así también con respecto a la gravación de las bebidas sin alcohol se tengan presentes esas normas, y sobre todo las desgravaciones que la República Argentina ha concedido al Paraguay en cuanto a jugos de frutas y a bebidas sin alcohol, como consta en una de las listas confeccionadas en cumplimiento del protocolo anexo al Tratado de Montevideo, que se refiere al tratamiento especial que se dispensa a aquel país como nación de desarrollo económico relativo.

He querido decir esto a esta altura de la exposición del señor diputado Prece, para encarecer a los miembros de la comisión tengan en cuenta estas observaciones en la oportunidad de debatirse en particular el proyecto de ley.

(1) Véase la inserción en el Apéndice, página 6448.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Me permite el señor diputado Prece?

Sr. Prece. — Sí, señor diputado.

Sr. Hernández Ramírez. — Deseo hacer notar que las bebidas gasificadas no alcanzadas expresamente por otros gravámenes ya tienen un impuesto interno del ocho por ciento. Además, las bebidas gasificadas que se preparen con extractos o concentrados aptos para la preparación de bebidas no alcohólicas, están también gravadas con un quince por ciento que se aplica a la materia prima. Es decir, que los impuestos internos en alguna forma inciden sobre estos productos en forma repetida cuya carga impositiva básica se lleva ahora hasta el diez por ciento.

Por otra parte, las bebidas gasificadas soportan impuestos nacionales, provinciales y municipales que representan mucho más de lo que las empresas invierten en el pago de salarios y de los dividendos de sus acciones.

Mi interrupción era al solo efecto de recordar esta situación al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Prece. — La comisión anuncia, por mi intermedio, que ha de estudiar nuevamente este aspecto del problema, para atender en cierta medida los intereses de las zonas productoras de frutas que puedan ser afectadas por este artículo.

Sr. Hernández Ramírez. — El país tiene distintas industrias afectadas por este impuesto, de modo que no hay que referirse exclusivamente a los citrus.

Sr. Prece. — Al discutirse en particular este asunto, prestaremos atención a las modificaciones que el señor diputado proponga.

Sr. Hernández Ramírez. — La exposición del señor diputado Ferreira ha sido muy clara al respecto, y no se limitó a la provincia de Entre Ríos.

Sr. Prece. — Continúo, señor presidente.

El artículo 7º del despacho ha sido modificado por la comisión, y según la nueva redacción, que obra en la Secretaría de la Cámara, se sustituye el artículo 5º del decreto ley 7.101/56 (modificado por el artículo 1º del decreto ley 6.264/58), que se refiere a la zona franca de Tierra del Fuego.

El dictamen de la comisión había previsto penalidades que serían aplicadas por la Comisión Permanente de la zona franca de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Circunstancias sobrevinientes que son del dominio público han determinado un cambio fundamental en el planteo. A diferencia de lo que se proponía anteriormente en el dictamen, el proyecto, mediante la sustitución prevista, tiende a sustraer a la comisión permanente las facultades ejecutivas que ahora tiene, dándole un carácter meramente asesor. La responsabilidad ejecutiva corresponderá, por tanto, a los distintos organismos públicos con competencia para decidir en cada caso.

La comisión asesora que se organiza será presidida por el representante de la gobernación de Tierra del Fuego y se integrará con representantes del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Industria y Minería y de la Dirección Nacional de Aduanas. El rasgo dominante de la modificación es la integración del organismo exclusivamente con funcionarios oficiales, evitándose así que los importadores agrupados en las cámaras de comercio puedan ser a la vez juez y parte.

Con esta reforma se espera que la inquietud provocada en la zona franca por el funcionamiento de la actual comisión permanente pueda ser superada a breve plazo.

Sr. Adrogué. — Si no he entendido mal, la comisión ha proyectado un artículo 7º nuevo.

Sr. Prece. — Sí, señor diputado. Solicito que se dé lectura del nuevo artículo propuesto por la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (González). — «Artículo 7º — Sustitúyese el artículo 5º del decreto ley 7.101-56, modificado por el artículo 1º del decreto ley 6.264/58, por el siguiente: "Artículo 5º — Créase una comisión encargada de asesorar a la Dirección Nacional de Aduanas en la aplicación del régimen establecido por el presente decreto ley y en particular en lo relacionado con la determinación de cupos de importación de franquicias, inscripción de compradores establecimientos de nuevas industrias, etcétera. La comisión estará presidida por el representante del gobierno del territorio nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, otro de la Secretaría de Marina, otro de la Secretaría de Industria y Minería y otro de la Dirección Nacional de Aduanas. La comisión formará quórum con la presencia del presidente y de por lo menos tres representantes, y el presidente tendrá doble voto en caso de empate".»

Sr. Adrogué. — ¿El agregado no está en el dictamen impreso?

Sr. Prece. — Es una modificación al dictamen impreso.

Sr. Adrogué. — ¿Y la referencia que se hace a la multa no está en el nuevo dictamen?

Sr. Prece. — No, señor diputado.

Sr. Marini. — Desde luego que el dictamen únicamente lo conoce el señor presidente de la comisión.

Sr. Prece. — Son modificaciones que obran en la mesa desde hace cuatro días y de las que la Cámara no tomó conocimiento.

Sr. Adrogué. — Tenía una observación que formular con respecto a la multa.

Sr. Prece. — He adivinado la intención del señor diputado.

Se ha incorporado también un artículo 17, que pido que se lea por Secretaría, que se refiere al ex Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre.

Sr. Presidente (Monjardín). — Por Secretaría se va a leer.

Sr. Secretario (González). — «Artículo 17. — Condónanse las sumas adeudadas por el Frigorífico Nacional Doctor Lisandro de la Torre en concepto de impuesto a las ventas, sus accesorios, intereses y multas correspondientes a los períodos en que desarrolló su actividad bajo dependencia oficial, ya sea del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.»

Sr. Prece. — El ex Frigorífico Nacional Doctor Lisandro de la Torre tiene una deuda en concepto de impuesto a las ventas, sus accesorios, intereses y multas correspondientes a los períodos en que desarrolló sus actividades bajo dependencia oficial, ya sea del Estado nacional o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Este artículo intenta solucionar este viejo pleito mediante la condonación de las sumas adeudadas, por entender que no existe mérito para exigir impuestos que en su momento no fueron trasladados al público y que recaerían exclusivamente sobre el fisco nacional y comunal. Es decir, es una solución que imponen las circunstancias.

Sr. Adrogué. — ¿Qué número llevaría el artículo?

Sr. Prece. — Es un artículo 17 nuevo.

Sr. Adrogué. — En el dictamen hay un artículo 17. ¿Se sustituye?

Sr. Prece. — No, señor diputado. Este es un nuevo artículo 17, porque se va a hacer un nuevo ordenamiento con estas modificaciones que anticipo a la Cámara, y que en la discusión en particular analizaremos más a fondo.

Señor presidente: el objeto de mi exposición era informar respecto de algunas incorporaciones y poner en conocimiento de la Cámara el pensamiento de la comisión sobre las exenciones para rentas no imponibles y cargas de familia. Con esta breve exposición, más bien de tipo particular que general, voy a dar por concluida mi exposición, para volver a hacer uso de la palabra cuando entremos a considerar el dictamen en particular. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado Conte.

Sr. Conte. — Señor presidente: pensaba hacer uso de la palabra cuando se tratara en forma particular el tema a que se refiere mi proyecto, pero como ya se ha referido a él el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adelantándose a dicha oportunidad, me veo obligado a hablar en general, sin perjuicio de hacerlo si lo creo conveniente al considerarse el dictamen en particular.

Desde hace dos años vengo hablando en el recinto del impuesto a los réditos, y he dicho que a mi juicio es un calificativo erróneo considerar impuesto a los réditos el que se aplica a lo que gana un empleado o un obrero, público

o privado. Esto me releva de pronunciar un largo discurso, a los que, por otra parte, no soy muy afecto. En cambio, tengo que hacer alguna pequeña historia, ya que la historia es la memoria de los hechos y los hechos son cuerpo de doctrina en virtud de los cuales se desenvuelven todos los acontecimientos humanos.

Por esto, voy a leer un párrafo de mi primer proyecto, presentado en el año 1960, sobre el mínimo no imponible. Decía en aquella oportunidad: «No es rédito una ganancia que carece de venalidad y que sólo sirve para afrontar con modestia el derecho a vivir o existir. Cárguese con impuestos al que más puede o posee, a fin de que el fisco logre los recursos que necesita.» Un año después, en Punta del Este, el señor ministro Alemann sostenía el mismo criterio al firmarse la carta de Alianza para el Progreso, donde figura un artículo que expresa: pague los impuestos el que más tiene. El Poder Ejecutivo nacional, ratificando este concepto al enviar el proyecto de presupuesto, decía en su mensaje lo siguiente: «En la carta de Punta del Este, acordada recientemente entre veinte naciones americanas para poner en marcha la Alianza para el Progreso, nuestro país asumió, entre otros, el compromiso de asegurar el desarrollo económico y social mediante medidas efectivas de ayuda propia, para lo cual se convino que resulta necesario, como lo dice expresamente la declaración de los pueblos de América que resume la carta, la reforma de las leyes tributarias para exigir más a quienes más tienen, castigar severamente la evasión de impuestos, distribuir la renta nacional a favor de los sectores más necesitados y al mismo tiempo para alentar la inversión y regresión de capitales y del ahorro.»

Quiero decir que hay una coincidencia que no se manifiesta generosamente, porque desde que presenté el primer proyecto apareció el primer equipo económico tratando de confundir a la opinión pública con la presentación de proyectos similares, sin mencionar para nada el proyecto que yo había presentado. Nada más que por gentileza debió haber aludido al proyecto presentado oportunamente por el diputado que habla.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Obras Públicas, ingeniero Isaac Breyter.

Sr. Conte. — Pero no solamente el equipo económico que presidió el ex ministro Alsogaray incurrió en esas contradicciones. El ex ministro de Economía doctor Alemann, cuando se hizo cargo del ministerio, se manifestó totalmente en contra de la desgravación de la cuarta categoría, para decir después —y lo señaló, con la gran elocuencia que lo caracteriza, mi distinguido colega el diputado Marini— que no se podía desgravarla a pesar de sus deseos porque había que aumentar las retribuciones de los docentes.

Como observamos, se va de contradicción en contradicción. Estas siguen. El senador Dávila creyó que el proyecto de desgravación de la cuarta categoría era del Poder Ejecutivo nacional, y en el Senado presentó una expresión de deseos a fin de que el Poder Ejecutivo remitiera cuanto antes a la Honorable Cámara de Senadores el proyecto que acabo de señalar. Como yo hice la manifestación el mismo día en el recinto de esta Honorable Cámara, el señor senador se enteró y el proyecto no siguió su curso. Luego, los legisladores de la mayoría presentaron proyecto tras proyecto. Esto me halaga, porque quiere decir que si abrí el surco han sabido recoger las buenas intenciones del diputado que habla al presentar un proyecto que significa el *súmmum* de la verdadera justicia social.

El proyecto participa del criterio del principio económico y político de que debe existir gobierno pobre y pueblo rico. He aquí el primer principio de la justicia social, que constituye una gran contribución a la pacificación interna que tanto necesita el país.

En dos oportunidades tuve que decir que el secretario de Hacienda, doctor Wehbe, estaba en contra de lo que dijo el ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires doctor Wehbe, porque éste desgravó a sus empleados del impuesto de la cuarta categoría. ¿Es así, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Conte. — Si yo hubiera tenido conocimiento de esa resolución habría homologado mi proyecto con la resolución del ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Sr. Secretario de Hacienda. — El directorio del Banco de la Provincia no tenía facultades para modificar un impuesto nacional. Sólo podía hacerse cargo del pago del impuesto a los réditos sobre los haberes de su personal, y así lo hizo.

Por otra parte, yo siempre he expresado estar de acuerdo con una política de desgravación paulatina. La experiencia de la provincia de Buenos Aires así lo demuestra. Pero esto no siempre es posible. Hay circunstancias distintas en cada caso que obligan a políticas diferentes. Siendo posible, yo participo anímica y racionalmente de los deseos que creo son generales de toda la Cámara, en cuanto a la desgravación.

Sr. Conte. — *Se non è vero, è ben trovato.* (Risas.) Realmente, la desgravación la ha realizado en virtud de un principio ideológico muy interesante y yo le hago justicia.

Los conceptos ideológicos y filosóficos no se miden por longitud sino por el numen que ellos encierran. Hoy me voy a atrincherar con opiniones no de economistas vulgares y silvestres, sino de filósofos de la economía política. No voy a expresar una opinión personal mía. Los partidarios de las doctrinas liberales, tales los filósofos clásicos ortodoxos como Adam

Smith o David Ricardo, sostenían que el salario no puede ser en manera alguna motivo de gravamen, porque sería una injusticia. Eso que son filósofos y economistas ortodoxos no tan liberales como los fisiócratas, cuyas ideas son más avanzadas y han sostenido la misma tesis. Para no ir tan lejos, voy a señalar que cuando Einaudi asumió el gobierno de Italia ésta se encontraba en un estado de catástrofe extraordinario. No obstante, su primera medida, acorde con el principio de gobierno pobre y pueblo rico, desgravó totalmente a todos los empleados en relación de dependencia, que son los únicos que pagan los impuestos. Como hoy el señor secretario de Hacienda se refería a los directores de sociedades anónimas que ganan mucho, le señalo que son una excepción. Además, si ganan mucho puede ubicárselos en la tercera categoría en lugar de la cuarta y se termina la cuestión.

Todos los acontecimientos humanos se dirigen a la defensa del capital humano, porque cuando éste se desgasta es muy difícil sustituirlo. En cambio, el capital metálico es fácilmente sustituible.

Cuando en 1960 el entonces secretario de Hacienda doctor Klein, a quien le reconozco capacidad en materia de economía y finanzas, sostuvo el peregrino criterio de que el aumento del impuesto a las ventas del 8 al 10 por ciento no iba a incidir en absoluto sobre los artículos de primera necesidad, manifesté que no solamente iba a incidir sobre los artículos de primera necesidad, sino hasta en el aire que respiramos. Y desgraciadamente tuve razón, porque no ya de día en día, sino de hora en hora aumentan los precios, sin solución de continuidad. El gobierno, para no ser menos, también aumenta. Y con estos pesos inflados, los que sufren son precisamente los obreros y empleados públicos y privados, y los jubilados, a quienes no les alcanza lo que ganan precisamente porque los pesos que reciben están totalmente desvalorizados. Además de eso, se los grava con un impuesto porque trabajan.

También dije el año anterior —lo reedito ahora— que hay que ampliar las facultades de la Dirección General Impositiva para que adopte las medidas que sean necesarias con las sociedades anónimas importantes, con los grandes monopolios, que son los que evaden los impuestos en perjuicio de la clase media.

En verdad hay que rendir homenaje a la acción desplegada por el interventor en la Dirección General Impositiva por haber tomado con tanto empeño y con tanta pasión su función. Declaro una vez más que no tengo ninguna vinculación personal con ese funcionario, el cual, según una estadística oficial emanada de la Dirección General Impositiva y que publica el diario «La Nación», ha logrado que esa institución haya tenido un aumento en sus ingresos, en materia de impuestos a las sociedades anónimas, de 6.464 millones de pesos. Es decir que esas entidades evadían el pago del

impuesto, perjudicando a los empleados públicos y privados del país.

Este proyecto ha provocado gran conmoción en la opinión pública, lo que se ha reflejado en editoriales periodísticos que hacen verdadero honor a los diarios que las publicaron. Ya he pedido la inserción de un editorial de «La Prensa», y ahora solicito que se haga lo propio con otro editorial del mismo diario de fecha 11 de abril de 1961 (1).

«La Razón», que tiene en su plantel de personal a un economista muy versado, ha publicado seis o siete artículos de fondo defendiendo mi proyecto, sosteniendo que no puede ser rédito lo que se gana con el trabajo personal.

El editorial del diario «La Prensa» cuya inserción he solicitado en último término se titula «Liberación de gravamen a los recursos del trabajo», y dice entre otras cosas lo siguiente: «Desde que en el país empezó a aplicarse esa parte de nuestro régimen de imposiciones observamos que a los recursos obtenidos en concepto de sueldos o salarios pagados al trabajo personal no les cuadraba la calificación de renta que el legislador les atribuía. Era un concepto generalizado en esa materia y que, por lo demás, encontraba fundamento en sus consecuencias sobre los intereses comunes que acarreaba perjuicios económicos fácilmente perceptibles.»

Podría citar otros editoriales, pero su lectura demandaría mucho tiempo, y, por lo tanto, cuando entremos en la discusión en particular voy a solicitar su inserción en el Diario de Sesiones.

También deseo recordar que la Honorable Cámara, a través de emocionados discursos pronunciados por diputados de todos los sectores, rindió un homenaje al cumplirse el septuagésimo aniversario de la encíclica *Rerum Novarum*, del Papa León XIII. Quiero suponer que ese homenaje no se hizo a la persona física del Papa León XIII, sino a la doctrina contenida en la ya famosa encíclica. Si esto ha sido así, debo traer a colación un párrafo de la encíclica que dice lo siguiente: «La gravación al trabajo personal es una evidente injusticia social.»

Con estas breves consideraciones, señor presidente, creo haber rebatido algunos argumentos vertidos en el curso del debate. Pero antes de terminar deseo señalar que es un error calificar como rédito al trabajo personal. El rédito es renta del capital, y renta es lo que se vincula con una inversión de capitales con fines de lucro. Es decir que se hace referencia a un lucro operante. Pero nunca puede ser rédito un sueldo que se utiliza, hoy malamente por la escasez, únicamente para la subsistencia de la familia.

Deseo que los señores diputados reflexionen sobre esta materia, porque si no tendré que dar la razón a Anatole France, que satirizaba de una

manera cruel a los académicos, porque al mismo tiempo que inventaban un concepto lo desnaturalizaban dándole una interpretación totalmente distinta a la original.

El propósito que he tenido en el curso de mi exposición, señor presidente, no ha sido sino que los habitantes de la República se puedan cobijar al amparo del pabellón nacional en una situación física y psicológicamente superior. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Oscar López Serrot.

Sr. Presidente (López Serrot). — Tiene la palabra el señor diputado Giordano Echegoyen.

Sr. Giordano Echegoyen. — El señor diputado Conte, con argumentos evidentemente incontrovertibles, ha demostrado que el impuesto a la cuarta categoría de réditos debe ser suprimido, pero también puede añadir como argumento el hecho de que existe superposición de impuestos. Debemos tener en cuenta que el 95 por ciento de las personas que trabajan, se encuentran en relación de dependencia y que contribuyen con el 10 o el 12 por ciento de sus remuneraciones a las distintas cajas de jubilaciones. Pero resulta que el Estado ha utilizado esos fondos para la atención de otras necesidades en lugar de dedicarlos específicamente al problema de las jubilaciones. El Estado adeuda a las cajas de jubilaciones, aproximadamente, 100 mil millones de pesos: 77 mil millones por bonos inconvertibles y 23 mil millones como contribución patronal que debe realizar el Estado. Es decir que proporcionalmente hay un impuesto global de más o menos 40 mil millones de pesos al que han contribuido los asalariados, creándose así un verdadero impuesto al trabajo personal. Y ahora se crea este nuevo impuesto que va a incidir sobre los contribuyentes de la cuarta categoría, sobre las personas que han contribuido ya a satisfacer las necesidades del Estado en esa forma indirecta.

Añado este argumento más para que el señor secretario de Hacienda pueda meditar al respecto, lo mismo que los integrantes de la comisión, a fin de dar satisfacción a este viejo anhelo del señor diputado Conte, que con tanto empeño ha expuesto ante la Cámara una inquietud que encierra verdadera justicia.

Sr. Presidente (López Serrot). — Está agotado el debate. Existe acuerdo unánime de los distintos sectores que integran la Cámara, y en mérito a él invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 20 y 45.

(1) Véase la inserción en el Apéndice, página 6449.

2

APENDICE

INSERCCIONES

1

INSERCCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PRECE

Elevación de la tasa del impuesto interno a las operaciones de seguros, eliminando el impuesto de sellos nacional y provincial sobre esas operaciones

Situación actual	Situación propuesta	Situación actual	Situación propuesta
I. Impuestos internos.		e) Seguros de vida, accidentes personales y agrícola-ganaderos	Exentos
a) Seguros elementales en general	8 ½ % 10 %	II. Impuesto nacional de sellos.	
b) Seguros de accidentes del trabajo y otros	2 ½ % 4 %	Seguros elementales 1 % sobre las primas	Se suprime
c) Seguros de importación	8 ½ % 8 ½ %	Seguros de exportación 4 % sobre las primas	Se suprime
d) Seguros de exportación	8 ½ % 9 %	del Estero, que cobra el 5 %, y Mendoza, Salta, La Rioja y La Pampa, que no cobran ...	Se suprime
Seguros de vida, accidentes personales, agrícola-ganaderos y de importación	Exentos	Seguros de vida 1 % sobre los capitales asegurados en la mayoría de las provincias, salvo las excepciones anteriores ...	Se suprime
III. Impuesto provincial de sellos.		Seguros agrícola-ganaderos, de importación y exportación ...	Exentos
Seguros elementales 1 % sobre las primas en la mayoría de las provincias, excepto Santiago			

MEMORANDUM

Impuestos internos y de sellos a las operaciones de seguros de las sociedades anónimas y sucursales de agencias de compañías extranjeras de seguros

Desarrollo en cifras

(Los cálculos se fundan en cifras extraídas de las publicaciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, correspondientes al año 1960.)

	Total de primas	Impuesto correspondiente
I. Impuesto interno a las operaciones de seguros.		
Seguros de ramos elementales (impuesto interno 8 ½ % sobre las primas)	\$ 7 800.000.000.—	\$ 663 000 000.—
Seguros de accidentes del trabajo (2 ½ %)	„ 1.800 000.000.—	„ 45.000 000.—
		\$ 708.000.000.—
II. Impuesto nacional de sellos.		
Seguros de ramos elementales (1 % sobre las primas de los seguros emitidos en jurisdicción nacional)	\$ 7.650.000.000.—	„ 76.500.000.—
III. Impuesto provincial de sellos.		
1) Seguros de ramos elementales (1 % sobre las primas en general de las pólizas emitidas en jurisdicción provincial y sobre las primas de las pólizas emitidas en jurisdicción nacional que cubren bienes radicados en jurisdicción provincial)		
a) Pólizas emitidas en jurisdicción provincial	\$ 1.967.000.000.—	\$ 19.670.000.—
b) Pólizas emitidas en jurisdicción nacional, cubriendo bienes radicados en las provincias (doble imposición)	„ 3.450.000.000.—	„ 34.500.000.—

Situación actual	Situación propuesta	Situación actual	Situación propuesta
2) Seguros de vida (1% sobre capital asegurado)			
a) Seguros emitidos en jurisdicción provincial		„ 430.000.000.—	„ 430.000.—
b) Seguros emitidos en jurisdicción nacional, gravados por doble imposición		„ 1.900.000.000.—	„ 1.900.000.—
			\$ 56.500.000.—

CONCLUSION

De lo expuesto resulta que por concepto de impuesto de sellos y de impuestos internos sobre las operaciones de seguros se recauda la siguiente cifra:

Impuestos internos	\$ 708.000.000.—
Impuesto nacional de sellos	„ 76.500.000.—
Impuestos provinciales de sellos (rubros 1 y 2)	„ 56.500.000.—
Total general	\$ 841.000.000.—

De aprobarse la eliminación del impuesto de sellos nacional y provincial y la correlativa mayor tributación por concepto de impuestos internos que se ha propuesto, se tendría sobre las mismas cifras de producción, el siguiente resultado:

Impuestos internos

Ramos elementales en general	\$ 7.800.000.000.—	10 %	\$ 780.000.000.—
Accidentes del trabajo y otros	„ 1.800.000.000.—	4 %	„ 72.000.000.—
			Total: \$ 852.000.000.—

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CONTE

(«La Prensa», 11 de abril de 1961)

Liberación de gravamen a los recursos del trabajo

Se ha anunciado oficialmente el propósito del Poder Ejecutivo de tomar la iniciativa para la gestión de una reforma a la ley de impuestos que gravan lo que el fisco ha venido considerando hasta ahora como ingreso patrimonial proveniente de réditos, sin entrar en distinciones que lógicamente corresponden para tribuirlas con propiedad ese carácter.

La reforma de referencia tendría por objeto establecer que los recursos ingresos provenientes del trabajo personal quedarán exentos de ese tributo.

Desde que en el país se empezó a aplicarse esa parte de nuestro régimen de imposición observamos que a los recursos obtenidos en concepto de sueldos o salarios pagados al trabajo personal no les cuadraba la calificación de renta que el legislador les atribuía. Era un concepto generalizado en esa materia y que, por lo demás, encontraba fundamento en sus consecuencias sobre los intereses comunes que acarrearían perjuicio económicos fácilmente perceptibles.

Mucho ha tardado en comprenderse lo razonable de la objeción al criterio erróneo en que el gravamen se extendió a los recursos de esa procedencia, y las primeras pruebas de ello se manifestaron en progresivas modificaciones a las bases sobre las cuales había de practicarse la liquidación periódica de las sumas correspondientes. Empezó por liberarse de toda imposición tributaria a los ingresos de escasa cuantía y luego se llegó hasta la desgravación de montos mucho más elevados. Ahora se iría a una liberación completa, sin consideración a aquellos montos, sino a la naturaleza de los recursos sometidos a tributación como si fueran un rédito, pero sin que lo sean, hablando en términos estrictamente financieros.

Afectados la clase media y el trabajador manual en su capacidad para el ahorro y el acrecentamiento del patrimonio propio, esencial para el progreso en la sociedad de régimen liberal e individualista, el gobierno, según el análisis que nos ocupa, entiende que propenderá así a fomentar las inclinaciones personales a capitalizar recursos dándoles una inversión de efectos benéficos en el campo de las actividades industriales y mercantiles. Está en lo cierto, y para comprenderlo basta considerar el desaliento del que no tarda en experimentar cómo, a medida que se lo remunera con más pesos, las exigencias del erario van creciendo, a punto de llegar a reclamarle la contribución de hasta el 59 por ciento de lo que cobra, pasado cierto límite. No olvidemos lo que influye esta sangría sobre el ánimo de muchos técnicos que fuera del país pueden ganar de estipendios no sujetos a tales extremos. El empresario tiene el recurso de elevar los precios en la proporción en que aumentan las cargas, del cual está privado el personal que pasa por la misma contingencia, sin que, por otra parte, como lo hacía notar la Cámara Argentina de Comercio en una presentación reciente, las deducciones por gastos a que obliga la mayor jerarquía alcance a compensar la disminución real de los medios de que dispone para hacer frente a carestías tanto más sensibles cuanto más declina el valor efectivo de la moneda.

A muchas injusticias de equilibrios se ha prestado hasta ahora el sistema, que las agrava inevitablemente, y la liberación proyectada dejaría de repercutir, en cambio, en beneficio de nuevas iniciativas e inversiones de utilidad para el país, al influir en la formación, en la vida de las industrias y del comercio, de crecientes fuentes de capital y de trabajo.